



UNA REGIÓN con claroscuros

“
INFORME SOMBRA SOBRE
EL CUMPLIMIENTO DEL ODS 16.10.1
EN 8 PAÍSES DE LAC
”



**LIBERTAD DE EXPRESIÓN: INFORME SOMBRA EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL OBJETIVO 16.10.01 DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LATINOAMÉRICA.**

Abril 18 de 2019

El contenido de este reporte puede ser reproducido en cualquier tipo de medio o en cualquier forma siempre y cuando se cite la fuente.

EQUIPO

Enrique Gasteazoro
Miguel Gómez
Milena García

En colaboración con:

Foro de Periodismo Argentino - **FOPEA** / Argentina
Asociación Nacional de la Prensa - **ANP** / Bolivia
Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios - **FUNDAMEDIOS** / Ecuador
Comité por la Libre Expresión - **C-Libre** / Honduras
Fundación Violeta Barrios de Chamorro / Nicaragua
Instituto Prensa y Sociedad - **IPYS** / Perú
Centro de Archivos e Información Pública - **CAinfo** / Uruguay
Instituto Prensa y Sociedad - **IPYS** / Venezuela

● PREFACIO

Al adoptar la Agenda para Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, los Estados Miembros establecieron revisiones temáticas de progreso para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los Estados Miembros acordaron que el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN), bajo el auspicio del Consejo económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), monitoreará y revisará un grupo anual de ODS. El FPAN está llamado a facilitar las evaluaciones de progreso de todos los ODS durante ciclos de cuatro años. En Julio 2019 la décimo séptima sesión del FPAN bajo el tema “Empoderar a la gente y asegurar la inclusión y equidad” completará el primer ciclo de revisiones temáticas con un análisis a profundidad de los objetivos ODS 4 (calidad de la educación), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10 (reducción de inequidades), ODS 13 (acciones climáticas) y ODS 16 (paz, justicia e instituciones fuertes), adicionalmente a ODS 17 (alianzas para los Objetivos), revisadas cada año.

La Agenda 2030 subraya el importante papel que los “grandes grupos” y otros actores juegan en la búsqueda de sociedades sostenibles para las futuras generaciones. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas reconocieron que alcanzar el desarrollo sostenible requeriría de la participación amplia y activa de todos los sectores. Siguiendo este mandato, Voces del Sur – un colectivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en ocho países de Latinoamérica – acordó colaborar en el desarrollo de un reporte paralelo sobre libertad de expresión como una manera de abogar por la libertad de prensa y la libertad de expresión en la región.

Este reporte paralelo constituye los esfuerzos de Voces del Sur por enriquecer y presentar información complementaria a la presentada por las Revisiones Voluntarias Nacionales (RNV) liderada por gobiernos. Este ofrece una evaluación independiente basada en la información más reciente registrada por organizaciones de la sociedad civil hacia el ODS 16, objetivo 16.10, indicador 16.10.1, proveyendo una visión general de los principales retos, políticas, alianzas y acciones coordinadas para promover el progreso hacia alcanzar el objetivo. En última instancia, también expresa el compromiso de este colectivo por continuar trabajando en el fortalecimiento de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Latinoamérica, lo cual intrínsecamente incluye monitorear y reportar el progreso hacia el ODS 16.

● TABLA DE CONTENIDOS

PREFACIO	4
RESUMEN EJECUTIVO	7
INTRODUCCIÓN	9
METODOLOGÍA	11
• Retos Metodológicos	13
CONTEXTO REGIONAL	14
RESULTADOS POR PAÍS	18
ARGENTINA	19
• Contexto	
• Alertas	
• Enfoque: La Sostenibilidad de los Medios de Comunicación	
• Recomendaciones	
BOLIVIA	23
• Contexto	
• Alertas	
• Enfoque: Propaganda Lucrativa y Asfixia Financiera	
• Recomendaciones	
ECUADOR	27
• Contexto	
• Alertas	
• Enfoque: La Amenaza No Estatal	
• Recomendaciones	
HONDURAS	31
• Contexto	
• Alertas	
• Enfoque: El Secreto como una Política de Estado	
• Recomendaciones	
NICARAGUA	35
• Contexto	
• Alertas	
• Enfoque: Terror y Resistencia	
• Recomendaciones	

● TABLA DE CONTENIDOS

PERU

- Contexto
- Alertas
- Enfoque: La Amenaza del Crimen Organizado en las Provincias
- Recomendaciones

39

URUGUAY

- Contexto
- Alertas
- Enfoque: Progreso en Acceso a la Información
- Recomendaciones

43

VENEZUELA

- Contexto
- Alertas
- Enfoque: La Crisis de los Medios Escritos
- Recomendaciones

47

CONCLUSIONES REGIONALES Y RECOMENDACIONES

52

● RESUMEN EJECUTIVO

La violencia y otros tipos de ataques en contra de periodistas (amenazas, intimidación, acoso legal/judicial, obstrucción del trabajo, vigilancia en línea y por medios no digitales, destrucción de equipo, confiscación de bienes, entre otros) no son sólo crímenes, sino también requieren especial consideración dada la naturaleza pública del trabajo periodístico. Ellas representan violaciones al derecho de la sociedad a estar informada. El periodismo independiente y el ambiente propicio que ello requiere son pilares de la democracia. Los periodistas deben ser capaces de trabajar de manera segura si los medios actúan como observatorio, y llamar la atención hacia las fallas del poder, como son los casos de corrupción, mal uso de recursos y abusos.

Voces del Sur diseñó un grupo de doce indicadores en común para facilitar el seguimiento y comparación de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Latinoamérica. Los indicadores en común están basados en el ODS 16, objetivo 16.10 e indicador 16.10.1, el cual se enfoca en proteger las libertades fundamentales y asegurar la seguridad y la protección a periodistas. Este reporte ayuda a evaluar el progreso hacia el objetivo ODS 16.10.1 en Latinoamérica mediante la evaluación de la situación de la libertad de prensa y la libertad de expresión para periodistas en ocho países utilizando estos indicadores en común. El reporte también brinda recomendaciones importantes para el fortalecimiento de estas libertades.

Los miembros OSC de Voces del Sur crearon una herramienta que permite el análisis comparativo del estado de la libertad de prensa y la libertad de expresión en la región. Los primeros cinco indicadores regionales están directamente enlazados con el indicador 16.10.1. Para determinar los indicadores adicionales, las organizaciones compartieron la mayoría de las violaciones comunes a la libertad de prensa y la libertad de expresión en sus países e identificaron temas en común. Estos fueron utilizados para diseñar ocho indicadores adicionales que permitan el seguimiento común a través de la región. Las organizaciones participantes acordaron incluir un indicador que ayudaría a identificar cuando la violación fue cometida identificando a la víctima con base en su género.

En 2018 los patrones de violencia extrema, impunidad y políticas autoritarias en contra de periodistas continuaron imbatibles en varios países Latinoamericanos. Utilizando esta herramienta, los ocho OSC miembros de Voces del Sur registraron un total de 732 alertas bajo los doce indicadores regionales en común; 44 fueron registradas como alertas de género y un alarmante número de 404 pertenecieron a ataques a la libertad de prensa y la libertad de expresión, teniendo al estado como perpetrador. Las agresiones y ataques fueron las alertas más recurrentes tanto a nivel regional como a nivel de cada país, seguido por las alertas relacionadas con el uso abusivo del poder estatal y el acceso a la información. Las violaciones contra la libertad de prensa y la libertad de expresión son tema común en la región. Los periodistas están también sujetos a violencia, intimidación y abuso, la mayoría de las cuales ocurren mientras se reporta sobre intereses especiales de los grupos de poder. La situación no es la misma en cada país. Las dramáticas inequidades que caracterizan a la región en términos sociales y económicos influyen la situación de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Mientras algunos países de la región como Uruguay (12 alertas)

y Perú (13 alertas) pueden ser considerados paraísos seguros para el ejercicio del trabajo periodístico, la región también incluye algunos de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo como Nicaragua (234 alertas) y Venezuela (196 alertas). Esta abrumadora diferencia se refleja entre los países, pero también dentro de los países. Por ejemplo, mientras el reporte registró solo 17 alertas en la provincia de Buenos Aires (capital y región más poblada), existieron 34 alertas reportadas en regiones menos pobladas de las áreas rurales. La violencia e intimidación en contra de periodistas parecieron incrementarse a medida que nos alejábamos de los centros principales de desarrollo.

Los retos y limitaciones pertenecientes a la forma del objetivo ODS 16 se mantienen bajo monitoreo. Los casos más allá de graves, como son asesinato o encarcelamiento, son difíciles de categorizar y documentar de manera estandarizada. Obstáculos importantes como son las barreras financieras y externalidades tales como leyes débiles tienen un gran impacto y aun así no han sido tomadas en cuenta. El acoso con frecuencia es utilizado como un medio de coerción. Resulta difícil monitorear la efectividad de las leyes de acceso a la información en una manera metodológicamente consistente que pueda facilitar las comparaciones entre países. El seguimiento y análisis de los ataques registrados en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión es débil. Para acelerar el progreso hacia el objetivo ODS 16 y 16.10 en Latinoamérica, diversos actores de los ecosistemas de medios de comunicación de la región deben colaborar para mejorar la capacidad para medir el estado e impacto del periodismo independiente, así como la construcción de un ambiente que permita el sostenimiento económico, político y social de una prensa libre.

El fomentar este ambiente propicio es responsabilidad de los Estados, la sociedad civil, los medios y el Sistema de Naciones Unidas, entre otros. Los Estados deben fomentar la creación de un ambiente que sea seguro, libre de violencia e intimidación y para asegurar la protección a periodistas, así como la prevención de violaciones y la persecución judicial de los perpetradores de crímenes en contra de periodistas. El sector de medios de comunicación de Latino América, por otro lado, es propicio para un enfoque de emprendimiento social, donde los medios puedan desarrollarse a través de una mezcla de cooperación para el desarrollo, inversiones de impacto y corrientes de retorno sostenible a través de la publicidad, financiación cooperativa (crowdfunding), modelos de membresía y nuevas unidades de negocios innovadores. Aprender a medir los retornos no financieros sobre la inversión en periodismo de calidad será un gran impulso para el ecosistema. Este papel podría ser más apropiado para la sociedad civil. Finalmente, el Sistema de Naciones Unidas también juega un rol primordial en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para reportar, monitorear y evaluar el progreso hacia el objetivo ODS 16.

Este informe sombra será presentado en julio de 2019 en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sustentable. Sin embargo, este reporte no puede ser visto meramente como una instancia para la credibilidad internacional sino además como un elemento principal de formulación de políticas para la protección de periodistas, la prevención de violaciones, y la persecución judicial a perpetradores de crímenes contra periodistas, así como una contribución a la sostenibilidad de los ecosistemas de medios de comunicación. El objetivo de estos mecanismos internacionales es crear un impacto a nivel nacional. La presentación de reportes solo tiene sentido en la medida que fomenta oportunidades y diálogo entre los actores locales y tiene un impacto en los contextos locales. De este modo, este reporte busca facilitar la construcción de diálogos tanto a nivel nacional, como a nivel internacional.

● INTRODUCCIÓN

El objetivo ODS 16 -‘**promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, brindando acceso a justicia para todos, y construyendo instituciones efectivas, confiables e inclusivas en todos los niveles**’- es tanto un resultado como un facilitador de desarrollo sostenible. Las instituciones y la Sociedad se refuerzan mutuamente, formando ya sea un ciclo virtuoso de mejoramiento o un ciclo vicioso de degeneración. Instituciones públicas abiertas, confiables y efectivas constituyen la base para la paz y la justicia mientras empoderan a la sociedad civil para involucrarse en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para el fortalecimiento de las instituciones, lo cual como resultado, nos lleva a sociedades más sostenibles.

El refuerzo mutuo también es evidente en el objetivo 16.10: ‘**asegurar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de acuerdo con la legislación nacional y los acuerdos internacionales**’. El libre flujo de información es tanto un prerrequisito para la protección de los derechos humanos como un derecho humano por sí mismo. La libertad de expresión es un derecho humano inalienable como lo establece el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, el acceso abierto y efectivo a la información pública confiable es una condición necesaria para promover el involucramiento ciudadano y la participación en la protección de las libertades fundamentales.

En particular, el indicador 16.10.1 -**número de casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y tortura en contra de periodistas, trabajadores de medios, líderes laborales y defensores de los derechos humanos** – busca proteger, entre otros, los derechos de los periodistas y los medios de comunicación a fin de que puedan realizar su trabajo sin tener que enfrentar violencia, amenazas o intimidación. Este indicador reconoce el promover ecosistemas de medios diversos y plurales con periodismo libre e independiente que cumpla el papel de observatorio y represente las voces de los ciudadanos, especialmente de aquellos que han sido descuidados, son vulnerables o han sido dejados de lado, esto constituye un paso importante en el fortalecimiento de la democracia y el cumplimiento de un desarrollo sostenible.

Este indicador fue categorizado como Tier II (“conceptualmente claro; metodología y normas internacionalmente establecidas están disponible, pero los países aún no producen información de manera regular) por la Inter-agencia y el Grupo de Expertos sobre indicadores ODS (IAGE-ODS) basados en sus niveles de desarrollo metodológico y la limitada disponibilidad de información para ello. Los mecanismos de reporte acordados, conocidos como VNR, son voluntarios y liderados por los estados, con cada gobierno en capacidad de decidir cómo estos objetivos deben ser incorporados a los procesos nacionales de planeación, políticas y estrategias. En un tema tan sensible como los derechos humanos y las libertades fundamentales, la información gubernamental no puede ser confiablemente considerada como la única fuente de reporte,

especialmente cuando esos mismos gobiernos pueden estar violando activamente las libertades. Por lo tanto, UNESCO ha sido designada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas como una agencia contribuyente con el seguimiento del progreso global del indicador 16.10.1. En colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) como la agencia responsable, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la agencia colaboradora, UNESCO ha iniciado el trabajo en una metodología mejorada para este indicador.

En este contexto ocho organizaciones sociales Latinoamericanas colaboraron bajo una iniciativa común, **Voces del Sur**, que busca fortalecer y mejorar el monitoreo y las alertas por libertad de expresión, fortaleciendo la efectividad de la defensa en temas de libertad de prensa y libertad de expresión, y estableciendo nuevas formas de coordinación y colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil en diferentes países. Ellos diseñaron un grupo de indicadores en común para facilitar el seguimiento y comparación de la libertad de expresión a lo largo de la región. Los indicadores en común están basados en el objetivo 16.10 y el indicador 16.10.1, el cual se enfoca en la protección de libertades fundamentales y el aseguramiento de la seguridad y protección para periodistas. Este reporte ayuda a establecer el progreso hacia el objetivo ODS 16.10.1 en Latinoamérica al evaluar la situación de la libertad de prensa y la libertad de expresión y la seguridad y protección para periodistas en ocho países utilizando estos indicadores en común.

El reporte analiza la libertad de prensa y la libertad de expresión, seguridad y protecciones para periodistas, el progreso hacia el objetivo ODS 16.10.1 basado en la información recolectada por las OSC. Se enfoca exclusivamente en periodistas, ya que los ataques contra defensores de los derechos humanos y líderes sindicales no son monitoreados sistemáticamente por todos las OSC participantes. Este reporte también brinda recomendaciones importantes para el futuro fortalecimiento de estas libertades. Está organizado utilizando las normas regionales en común desarrolladas bajo **“Voces del Sur”**.

● METODOLOGÍA

En Octubre 2018, las organizaciones de la sociedad civil de siete países Latinoamericanos, Instituto Sociedad y Prensa (IPYS) de Perú, Asociación Nacional de Prensa (ANP) de Bolivia, FUNDAMEDIOS de Ecuador, Instituto Sociedad y Prensa (IPYS) de Venezuela, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) de Uruguay, Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) de Honduras, y Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) de Argentina, se unieron para juntos desarrollar los indicadores regionales para monitorear y reportar violaciones en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Estas organizaciones trabajaron conjuntamente en la construcción de indicadores regionales en común basados en el indicador ODS 16.10.1. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro de Nicaragua se unió más tarde a la iniciativa y contribuyó con ideas e información para incluir a Nicaragua en el reporte dada la precaria situación del país.

Los objetivos ODS resultaron de un proceso inherentemente político y no monitorean ampliamente todos los factores, instituciones y estructuras claves que están asociadas con la libertad de prensa y la libertad de expresión. El marco de trabajo de 16.10.1 ofrece una adecuada pero limitada metodología para monitorear y comparar el progreso al asegurar el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales. Mientras el objetivo ODS 16.10.1 se enfoca exclusivamente en “casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura”, los indicadores de Voces del Sur ofrecen un amplio enfoque más allá de los retos relevantes que cada uno de los ocho países enfrenta. Por lo tanto, ellos son responsables por otras formas en las cuales la libertad de prensa y la libertad de expresión están restringidas, como ataques que puedan resultar o no en muerte, discurso estigmatizador, procesos judiciales viciados y restricciones de acceso a Internet.

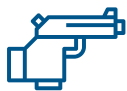
Debido a que estas son evaluaciones normativas por parte de Voces del Sur y no son objetivos oficiales que hayan sido acordados como parte del proceso de desarrollo de los objetivos ODS, las tendencias en este reporte deberán ser interpretadas con precaución, y son únicamente sugerencias de si un país se está moviendo hacia el cumplimiento de su objetivo ODS 16.10. Voces del Sur ha incluido indicadores adicionales a fin de brindar un entendimiento más detallado del desempeño de cada país del objetivo ODS 16.10. Requerirá un esfuerzo sostenible y un proceso de mejoramiento continuo para alcanzar la alineación óptima con los mecanismos y herramientas de reporte ODS a nivel global.

Voces del Sur ha diseñado 12 indicadores regionales en común para facilitar el reporte del objetivo ODS indicador 16.10.1. Estos están diseñados para cumplir con el principio de la Agenda 2030 para los mecanismos de Seguimiento y Revisión (FUR – por sus siglas en inglés) los cuales deben ser inclusivos, participativos, transparentes, centrados en las personas, basados en derechos y sensibles a temas de género para asegurar su credibilidad. Estos indicadores regionales en común promueven un entendimiento más profundo de los diferentes niveles de amenazas en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Latinoamérica y fortalecen el análisis comparativo a través de los países. Los indicadores están concebidos para servir a los Estados Miembros y a otros actores para diseñar políticas públicas, así como para presionar y abogar por cambios institucionales que beneficien la libertad de prensa y la libertad de expresión.

12 INDICADORES REGIONALES

PARA FACILITAR EL MONITOREO DEL INDICADOR ODS 16.10.1

1. ASESINATOS



- Ataques que llevaron a la muerte.
- Homicidios intencionales como represalia por el ejercicio del periodismo.

7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR



- Insultos o ataques a la reputación provenientes de oficiales públicos o figuras públicas importantes.
- Campañas sistemáticas para desacreditar la reputación.

2. SECUESTROS



Abducciones y detenciones ilegales de una o más personas contra su voluntad, incluyendo el uso de fuerza, amenaza, fraude o persuasión como mecanismo para de manera deliberada obstruir, censurar o influenciar de manera negativa el trabajo periodístico.

8. ACCESO A INFORMACIÓN



- Restricciones contra el derecho al acceso a información pública en la forma de rechazo, entrega parcial o incompleta, omisión.
- Obstrucción del trabajo periodístico.

3. DESAPARICIONES FORZOSAS



Arrestos, detenciones o transferencias en contra de la voluntad del periodista y/o sus familiares por parte de agentes del gobierno, grupos organizados que actúan en nombre del gobierno con su apoyo directo o indirecto y aquellos que nieguen información sobre los pormenores o situaciones de aquellas personas; o nieguen que ellos se encuentren en custodia, colocándolos efectivamente fuera de la protección del debido proceso y las leyes.

9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN CONTRA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS



- Procedimientos Civiles.
- Procedimientos Penales.

4. DETENCIONES ARBITRARIAS



Son consideradas cuando

- No existe base legal que justifique la detención de un periodista o sus familiares.
- Cuando la detención es consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión de acuerdo a la definición de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL



- Propaganda oficial y asignación abusiva de publicidad estatal.
- Concesión irregular de frecuencias.
- Sanciones administrativas.
- Restricciones de bienes y servicios que son materiales para producción.
- Cierre de medios de comunicación.
- Rectificación forzada o retiro de contenido sin una orden judicial.

5. TORTURA



Cualquier acto en el cual, dolor, castigo, intimidación, coerción, sufrimiento grave ya sea físico o psicológico es infringido intencionalmente en periodistas o sus familiares.

11. MARCO JURÍDICO CONTRARIO A LAS NORMAS



Propuesta y/o aprobación de normas que restringen la libertad de expresión y/o constituyen censura.

6. AGRESIONES Y ATAQUES



- Ataques contra la integridad física de periodistas y/o sus familiares.
- Redadas y/o ataques contra la infraestructura de medios de comunicación o propiedad de periodistas.
- Destrucción o confiscación de equipo periodístico.
- Desplazamiento forzado.
- Amenazas.

12. RESTRICCIÓN DE INTERNET



- Cierre y suspensión arbitraria de las cuentas de redes sociales.
- Hackeo.
- Amenazas Cibernéticas.
- Bloqueo selectivo de sitios web.
- Uso de cuentas institucionales o de autoridades para bloquear usuarios.

INDICADOR TRANSVERSAL



Cualquier evento descrito en los 12 indicadores incluirá una evaluación para verificar si existen indicios de discriminación basada en género.

• Retos Metodológicos

El objetivo ODS 16 ha sido descrito como un objetivo facilitador y transformador debido a que su implementación puede facilitar el progreso hacia otros objetivos ODS. Está entre los objetivos más ambiciosos de la Agenda 2030 y presenta retos únicos en términos de implementación y monitoreo. Existen numerosos problemas metodológicos, retos políticos, así como problemas prácticos y de implementación con respecto a la recolección de información y a la capacidad estadística que debe ser alcanzada.

El objetivo ODS 16.10.1 se clasificó originalmente como un indicador Tier III, lo cual significaba que no existía una metodología o norma establecida internacionalmente que estuviera disponible para el indicador, pero metodologías y normas serían desarrolladas o probadas en el futuro. En el 2017 durante la sexta reunión de IAEG-ODS, el objetivo ODS 16.10.1 fue reclasificada como un indicador Tier II, lo cual significa que ahora es conceptualmente claro, posee metodologías y normas establecidas internacionalmente y éstas están disponibles, pero los países todavía no producen información regularmente. Otra dificultad es el hecho de que las oficinas nacionales de estadísticas (NSO – por sus siglas en inglés) no pueden medir independientemente algunos objetivos debido a razones políticas sensibles. Un claro ejemplo de un indicador ODS 16.10.1 es el asesinato o detención arbitraria de periodistas o activistas de derechos humanos lo cual es particularmente retador para los gobiernos al momento de producir un monitoreo confiable.

En respuesta a estos retos, **Voces del Sur** buscó crear estos indicadores en común para permitir un análisis comparativo con respecto al estado de la libertad de prensa y la libertad de expresión en la región. Este esfuerzo fue reconocido en una publicación del 2018 por parte de la Oficina Regional de Ciencia en Latinoamérica y el Caribe / Oficina de Montevideo de UNESCO titulada “La Seguridad de los Periodistas en las Agendas de Desarrollo Sostenible de Derechos Humanos: Oportunidades para Mejorar el Reporte sobre Violaciones de Derechos Humanos en Guatemala, Honduras, y El Salvador”. La Oficina regional de UNESCO elogió los esfuerzos de **Voces del Sur** para desarrollar estos indicadores. El proceso inició en septiembre de 2017 en Ecuador. El primer grupo de indicadores fue presentado para consideración y validación por parte del Ponente Especial para la Libertad de Expresión IACHR. A principios de 2018 el primer reporte que contenía los indicadores fue publicado. Sus principales resultados fueron presentados durante el Período 167 de Sesiones de IACHR, el cual se llevó a cabo en marzo de 2018 en Colombia. **Voces del Sur** alineó su sistema de monitoreo unificado con el indicador ODS 16.10.01 durante la reunión para el Intercambio Internacional sobre Libertad de Expresión (IFEX – por sus siglas en inglés) en Quito en abril de 2018.

A pesar de estos esfuerzos, el desarrollo de una tendencia de análisis consistente para el indicador de cada país aún no es posible dados los considerables vacíos en la información que aún existen. Para seguir tendencias, la información de las series de tiempo debe existir para comprobar si los países se están moviendo hacia o en contra del cumplimiento de sus objetivos. Al momento, la mayoría de los indicadores solo tienen un año de información. Sin la información adicional no será posible comprender si los países se están moviendo en la dirección correcta. Es claro que la disponibilidad de información armonizada para comparar a través de los países puede ser crítica a fin de lograr que los países contabilicen y ayuden a direccionar recursos hacia donde más se necesitan. Este reporte monitorea el progreso hacia el objetivo ODS 16.10.1 con la información disponible registrada por ocho OSC latinoamericanas. El hecho de que algo de la información pueda ser parcial o incompleta debe crear conciencia de los importantes retos metodológicos relacionados con el monitoreo del progreso hacia el objetivo ODS 16.

● CONTEXTO REGIONAL

El periodismo independiente es un trabajo de alto riesgo en Latinoamérica, lo cual hace de los periodistas independientes latinoamericanos un grupo vulnerable. A pesar que existe diferencias considerables a lo largo de los países de la región, incluyendo el número y gravedad de los incidentes registrados contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, también existen importantes características y tendencias en común. Los actores estatales y otros con lazos directos a estructuras de poder económico y político, son los perpetradores primarios de los ataques y amenazas en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Latinoamérica. El incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas como principales amenazas contra periodistas y medios de comunicación es también una realidad que se comparte en la región. Altos grados de impunidad son temas en común en casos de ataques en contra de estas libertades, lo cual a su vez alimenta un ciclo de violencia e intimidación en contra de medios de comunicación, periodistas y ciudadanos que resulta eventualmente en censura o auto censura. Este ciclo obstaculiza el acceso a la información que es invaluable para el desarrollo sostenible de la sociedad. La complicidad del estado y la responsabilidad directa en los ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión a través de Latinoamérica, junto con la creciente impunidad, tienen un impacto negativo en la implementación de la Agenda 2030, especialmente en las provisiones claves sobre derechos humanos del objetivo ODS 16.

Los periodistas en Latinoamérica enfrentaron violencia, demandas legales, y acoso por parte de la policía en 2018. A pesar que el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras mostró una leve mejora en general de la libertad de expresión en la región, los patrones de violencia extrema, impunidad, y políticas autoritarias en contra de periodistas en varios países Latinoamericanos continúa imbatible. Los ataques en contra de la prensa libre todavía son frecuentes, en especial en eventos políticos y manifestaciones. Los periodistas todavía están sujetos a intimidación y procesos judiciales abusivos, especialmente cuando se encuentran reportando sobre eventos con intereses especiales por parte de políticos u oficiales electos.

A lo largo de 2018, se registraron 733 alertas en ocho países participantes en Latinoamérica bajo los doce indicadores regionales en común diseñados por Voces del Sur; 44 también fueron registrados como alertas de género y un alarmante número de 404 pertenecen a ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión contando con el estado como perpetrador. Las agresiones y ataques fueron las alertas más recurrentes tanto a nivel regional como de país, seguidas por las alertas relacionadas con el uso abusivo del poder estatal y el acceso a la información. Con respecto a algunas de las violaciones más espantosas contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, seis periodistas fueron asesinados, ocho secuestrados y dos fueron torturados en Latinoamérica en 2018. Nicaragua es el país con el mayor número de alertas registradas con un amplio margen.

Existieron 44 alertas de género reportadas en la región durante 2018. Esto no significa que la violencia de género y la misoginia no son problemas. La violencia de género en el periodismo puede permanecer invisible en una industria ampliamente sesgada en temas de género. Este número relativamente bajo de alertas puede también reflejar debilidad de parte de las OSC participantes con respecto a la identificación y registro de alertas de género.

AMÉRICA LATINA

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018



✓ VISIÓN GENERAL



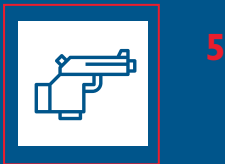
Acontecimientos con indicios de discriminación de género.



Incidentes perpetrados por funcionarios del Estado.

✓ CASOS POR INDICADORES

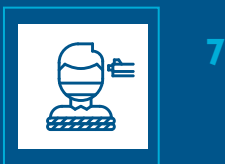
1. ASESINATOS



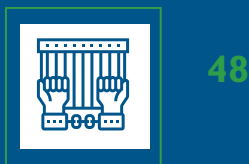
2. SECUESTROS



3. DESAPARICIONES FORZOSAS



4. DETENCIONES ARBITRARIAS



5. TORTURA



6. AGRESIONES Y ATAQUES



7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR



8. ACCESO A LA INFORMACIÓN



9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS



10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL



11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL CONTRARIO A LAS NORMAS



12. RESTRICCIONES DE INTERNET



En América Central en particular, la violencia y la impunidad colocan a los periodistas y los medios de comunicación bajo un estado de constante miedo y auto censura. En Honduras, los reporteros investigativos, especialmente aquellos que cubren temas de crimen organizado y corrupción a nivel gubernamental, son expuestos sistemáticamente a amenazas, intimidación y violencia física, convirtiéndose en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

En Nicaragua, la crisis social que desembocó en protestas anti gubernamentales resultó ser letal para el periodista Ángel Gahona, mientras que otros dos reporteros han sido encarcelados y torturados bajo acusaciones de terrorismo por ejercer su labor periodística. En términos generales, los periodistas independientes en Nicaragua han sido atacados de manera sistemática, poniendo en peligro sus vidas, derechos, propiedad y equipo.

Los sistemas de justicia de América Central con frecuencia en complicidad con el crimen organizado y oficiales corruptos, fallan en investigar y procesar judicialmente estos ataques. Donde existen mecanismos específicos de protección a periodistas, estos han resultado ser ineficientes al momento de tratar con las terribles condiciones de inseguridad de periodistas. Una situación similar ocurre en México, un país que en 2018 continuó como la nación más letal (que no esté inmersa en un conflicto armado) para los periodistas a nivel mundial. Por el momento, no se incluye un capítulo sobre México en este reporte ya que se encuentra fuera del campo de acción de **Voces del Sur**.

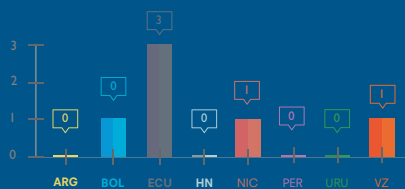
COMPARACIÓN REGIONAL



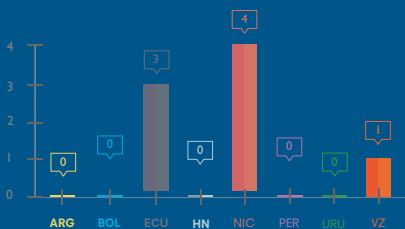
- ARGENTINA
- BOLIVIA
- ECUADOR
- HONDURAS
- NICARAGUA
- PERU
- URUGUAY
- VENEZUELA



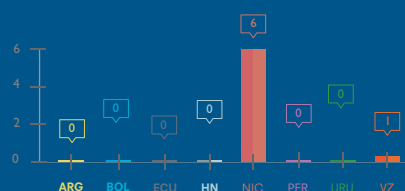
1. ASESINATOS : 5



2. SECUESTROS : 8



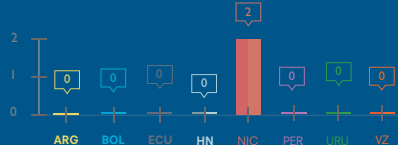
3. DESAPARICIONES FORZOSAS : 7



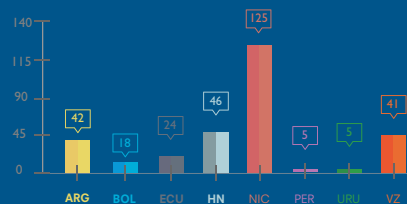
4. DETENCIONES ARBITRARIAS : 48



5. TORTURA : 2



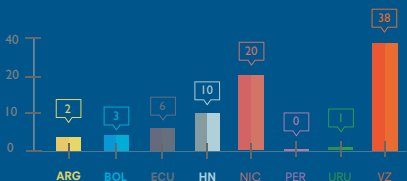
6. AGRESIONES Y ATAQUES : 297



7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR : 47



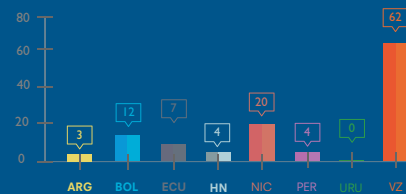
8. ACCESO A LA INFORMACIÓN : 80



9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS : 37



10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL : 112



11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL CONTRARIO A LAS NORMAS : 11



12. RESTRICCIONES DE INTERNET : 74





RESULTADOS **por País**



“
Argentina
”

• Contexto

La elección de Mauricio Macri como presidente ha marcado la reducción en las tensiones entre el Estado y los Medios de Comunicación en Argentina. Este ambiente mejorado ha permitido que reporteros de investigación denuncien e investiguen presuntos esquemas de corrupción que prevalecieron durante la administración anterior. Las investigaciones periodísticas conocidas como los “Cuadernos de la Corrupción” fueron publicados en agosto de 2018 y abrieron uno de los casos de corrupción más importantes en la historia de Argentina.

Estas investigaciones revelaron en detalle el recorrido mediante el cual circulaban bolsas llenas de dinero presuntamente relacionadas con millones en sobornos por parte de contratistas hacia los funcionarios del gobierno de Kirchner. Este caso demostró que los periodistas son relativamente libres de ejercer su trabajo, incluso cuando exponen abusos de las más altas esferas de poder – al menos en Buenos Aires. Los periodistas y medios de comunicación que llevan a cabo este tipo de investigación enfrentan retos, y aun así disfrutan de amplio reconocimiento y apoyo social en la capital.

Sin embargo, la situación es diferente en las provincias argentinas. Allí, los periodistas enfrentan constantes ataques físicos, amenazas violentas que buscan intimidarlos y abuso de poder por parte de autoridades locales y crimen organizado.

• Alertas

Durante 2018, se registraron 51 alertas de ataques directos contra la libertad de prensa y libertad de expresión en Argentina; 82% relacionadas con agresiones y ataques, 4% por acceso a información, 7% por uso abusivo del poder estatal y 7% por restricciones de internet. En 10 de las 49 alertas el estado fue identificado como el perpetrador. Las alertas registradas no reflejan necesariamente una persecución sistemática a la prensa en Argentina, pero revelan una tendencia que significa una amenaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en el país: la llamada política del hombre fuerte.

Este estilo de liderazgo autoritario está presente especialmente en las provincias e interior del país; 34 alertas se registraron en las provincias, 17 en Buenos Aires. Actores No Estatales, especialmente el crimen organizado y traficantes de drogas, representan una amenaza en las provincias. Periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Paraná recibieron amenazas públicas de muerte por parte de traficantes de drogas acusados, mientras que la ciudad de Rosario se ha convertido en un centro del tráfico de drogas bajo una permanente guerra entre carteles. Algunos casos de ataques contra la libertad de prensa y la libertad de expresión se registran anualmente en estas áreas. Los periodistas y medios se encuentran amenazados y presionados para abstenerse de registrar dichos ataques.

ARGENTINA

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018



✓ VISION GENERAL



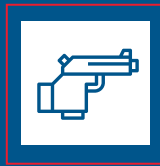
Acontecimientos con indicios de discriminación de género.



Incidentes perpetrados por funcionarios del Estado.

✓ CASOS POR INDICADORES

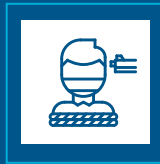
1. ASESINATOS



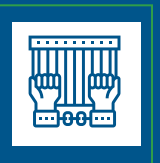
2. SECUESTROS



3. DESAPARICIONES FORZOSAS



4. DETENCIONES ARBITRARIAS



5. TORTURA



6. AGRESIONES Y ATAQUES



7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR



8. ACCESO A LA INFORMACIÓN



9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS



10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL



11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL CONTRARIO A LAS NORMAS



12. RESTRICCIONES DE INTERNET





ENFOQUE: Sostenibilidad de los Medios de Comunicación

En general, el estado es el agresor primario contra la libertad de prensa y la libertad de expresión en Argentina. Esto también se manifiesta en términos financieros. La pérdida de trabajos en medios de comunicación es quizás la mayor amenaza al periodismo en el país. Este fenómeno se ha intensificado en los últimos 5 a 6 años. Durante los años de Kirchner, los medios de comunicación surgieron al ser financiados a través de publicidad estatal. Esta práctica estatal abusiva de asignar su presupuesto publicitario sin transparencia sirvió a sus propios intereses y ha tenido un impacto negativo en la calidad y cantidad de voces en los medios de comunicación ya que los medios se encuentran asfixiados económicamente y han sido obligados a cerrar. El Observatorio Laboral FOPEA estima que solo entre 2017 y 2018, 1.634 trabajos se perdieron en el área de periodismo sumándose a un total de 3.000 trabajos perdidos desde 2015 y un número igual o incluso mayor está actualmente en riesgo.

• Recomendaciones

Si las amenazas más críticas y violentas a la libertad de prensa y la libertad de expresión en Argentina se presentan en las provincias, los esfuerzos y recursos tienen que ser enfocados allí. Las OSC y los medios de comunicación deben trabajar en conjunto a fin de desarrollar las capacidades, conocimientos y herramientas que les permitan enfrentar los ataques de actores no gubernamentales. Los esfuerzos para incrementar la participación de las audiencias y su lealtad son de extrema importancia. Comunidades y relaciones fuertes entre periodistas, medios y lectores pueden ayudar a mitigar los abusos de políticos fuertes. Más aún, este tipo de capital social puede servir como la base para modelos innovadores de negocios para un periodismo independiente sostenible, como es el caso de las membresías. Los ecosistemas de medios independientes deben ser analizados y fortalecidos desde una perspectiva de emprendimiento a fin de impulsar los modelos existentes y estimular los nuevos modelos emergentes.



Bolivia



• Contexto

La persecución a la prensa está institucionalizada en Bolivia. Sus principales pilares incluyen la asfixia financiera a los medios de comunicación independientes a través de prácticas abusivas de asignación de publicidad estatal; la aprobación de normas que restringen la libertad de prensa y la libertad de expresión y facilitan la censura; y un discurso oficial que estigmatiza a los periodistas y los medios. Insultos, ataques a la reputación y amenazas constituyen un accionar siniestro de sectores a favor del gobierno para atacar física y verbalmente, así como robar a los reporteros que cubren conflictos sociales y otros temas sensibles. Los periodistas en Bolivia están expuestos a amenazas y ataques verbales de un amplio número de actores que van desde el presidente hasta la policía, incluyendo ministros, oficiales de nivel medio y alcaldes. Desde 2016 el gobierno, sus oficiales, y aliados han orquestado una campaña para minar la credibilidad del periodismo investigativo al etiquetar a los periodistas y medios de comunicación independientes como el “cartel de las mentiras”. La polarización causada por el discurso estigmatizador es promovido por los niveles más altos del gobierno y se traduce en amenazas y ataques, tanto físicos como verbales, en contra de periodistas y sus allegados. Agentes y miembros estatales del partido político gobernante han perpetrado la mayoría de estos ataques.

• Alertas

Existieron 65 alertas registradas en Bolivia en 2018. 70% de ellas apuntaban al estado, incluyendo policía, jueces, ministros e incluso al presidente como el principal perpetrador. El discurso estigmatizador corresponde al 32% de las alertas registradas en el país y el estado ha sido identificado como el perpetrador en el 85% de todos los casos de discurso estigmatizador. Esto revela un patrón de confrontación entre el estado y los medios de comunicación que ha prevalecido durante los sucesivos gobiernos de Evo Morales.

También existieron 18 casos de ataques y agresiones, los cuales representan el 28% de todas las alertas. Las fuerzas estatales son nuevamente los perpetradores más comunes. Esto corrobora un patrón sistemático de violencia promovida por el estado en contra de la prensa en Bolivia. Además el 57% de todos los ataques y agresiones atribuidos al estado fueron dirigidos en contra de mujeres, lo cual además demuestra un preocupante patrón de misoginia.

El tercer incidente más común en Bolivia en 2018 fue el uso abusivo del aparato estatal, constituyendo el 18% de todas las alertas. Bolivia se ubica en el primer lugar de los países en este reporte por el número de legislaciones propuestas y/o aprobadas que limitan la libertad de prensa y la libertad de expresión; otro ejemplo de los esfuerzos estatales sistemáticos por silenciar a los medios independientes del país.

BOLIVIA

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018



✓ VISIÓN GENERAL



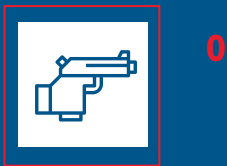
Acontecimientos con indicios de discriminación de género.



Incidentes perpetrados por funcionarios del Estado.

✓ CASOS POR INDICADORES

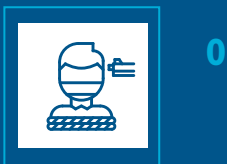
1. ASESINATOS



2. SECUESTROS



3. DESAPARICIONES FORZOSAS



4. DETENCIONES ARBITRARIAS



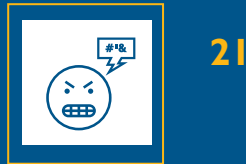
5. TORTURA



6. AGRESIONES Y ATAQUES



8. ACCESO A LA INFORMACIÓN



8. ACCESS TO INFORMATION



9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS



10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL

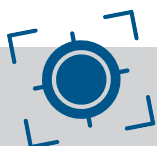


11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL CONTRARIO A LAS NORMAS



12. RESTRICCIONES DE INTERNET





ENFOQUE: Propaganda Lucrativa y Asfixia Financiera

Bajo el mandato del presidente Evo Morales, los medios de comunicación pertenecientes al estado se han convertido en un aparato extraordinario de propaganda. La retórica del gobierno es transmitida y promovida por todo el país a través de una red de más de 200 estaciones de radio en áreas urbanas y rurales. Radio Patria Nueva coordina esta red masiva. La fortaleza de la televisión gubernamental se encuentra en el satélite de comunicaciones Tupak Katari, el cual transmite la señal de televisión de Bolivia a otros continentes. El satélite también transmite la señal de canales privados de televisión que pertenecen a aliados del gobierno quienes son recompensados con publicidad estatal. Los medios de comunicación independientes que critican al gobierno están excluidos de la publicidad estatal y la transmisión por satélite. Más aún, el gobierno boliviano ha presentado y aprobado 13 leyes y decretos para forzar a periódicos, y estaciones de radio y televisión a presentar campañas estatales de manera gratuita. Estas medidas sumadas al antes mencionado aparato de propaganda a través de los medios de comunicación del estado y sus aliados, constituyen un poderoso mecanismo para reunir apoyo político para el presidente.

• Recomendaciones

En Bolivia, la libertad de prensa y la libertad de expresión han sido debilitadas a lo largo de los últimos años. Las OSC y los medios de comunicación deben colaborar para mitigar y responder al discurso estigmatizador que busca erosionar el capital social entre el periodismo y su audiencia. El ecosistema de medios de comunicación independientes bolivianos deben buscar el sostenimiento económico, político y social. La lealtad y confianza entre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos debe jugar un rol primordial. En el campo del preocupante marco judicial de Bolivia, los esfuerzos de defensa deben estar direccionados hacia la creación de algún tipo de fuerza de trabajo que pueda entender y enfrentar de mejor manera este reto. Esto debería ser realizado dentro del marco de trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se recomienda que el Gobierno implemente una estrategia integral para promover y defender la libertad de prensa y la libertad de expresión.



Ecuador



• Contexto

Ecuador se encuentra actualmente en un proceso de transición de un gobierno conocido por su hostilidad para con la prensa libre, hacia un gobierno que está abierto al diálogo y que está dispuesto a reducir la confrontación. El nuevo gobierno ha adoptado estrategias y medidas para consolidar este proceso. El abuso del poder estatal y las agresiones contra periodistas fueron descontroladas en el anterior gobierno de Rafael Correa. Esto ha dado paso a una reducción considerable de la animosidad contra la prensa y la implementación de reformas significativas, tales como el retiro del Superintendente de Comunicaciones, reformas a la Ley de Comunicación y la eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación. Esta controversial institución sancionó y multó de manera abusiva a periodistas y medios de comunicación. Sanciones y multas que prácticamente han desaparecido. El gobierno de Lenin Moreno ha intentado de manera generalizada reconocer y respetar el papel de los medios de comunicación en mantener la credibilidad del sector público.

Sin embargo, aún existen amenazas y riesgos considerable en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Ecuador. Los actores estatales son quienes realizan la mayoría de los ataques en contra de la prensa en el país, a través de medidas administrativas, judiciales y legislativas. Estos ataques ya no se originan en el gobierno central, sino en las autoridades y oficiales locales. Algunos ejemplos incluyen autoridades y oficiales públicos que presionan procesos para criminalizar y perseguir a aquellos que los critican en los medios de comunicación llegando a multas y encarcelamiento; las agresiones en contra de reporteros y camarógrafos que cubren movilizaciones de partidos políticos; y casos de censura en internet.

• Alertas

En 2018 un total de 83 alertas se registraron por violaciones en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Ecuador. La mayoría de esos casos, precisamente el 30%, fueron relacionados con restricciones de Internet incluyendo el cierre y suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales, hackeo, amenazas cibernéticas y bloqueo de sitios web. La mayoría de estas violaciones fueron perpetradas ya sea por fuentes desconocidas o por negocios internacionales privados. Esto podría revelar una debilidad fundamental en el periodismo en línea ecuatoriano: la seguridad cibernética. Las agresiones y ataques sumaron el 28% de las alertas registradas.

El estado, mayormente a través de autoridades locales y oficiales de mediano rango fue identificado como perpetrador en el 25% de estas violaciones. Este también es el caso de violaciones relacionadas con un uso abusivo del poder; la mayoría de las violaciones provenían de autoridades políticas de rango medio. Los bajos niveles de respeto y tolerancia dibujan una preocupante tendencia entre las autoridades locales y de rango medio en Ecuador.

ECUADOR

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018



✓ VISION GENERAL



Acontecimientos con indicios de discriminación de género.



Incidentes perpetrados por funcionarios del Estado.

✓ CASOS POR INDICADORES

1. ASESINATOS



3

2. SECUESTROS



3

3. DESAPARICIONES FORZOSAS



0

4. DETENCIONES ARBITRARIAS



0

5. TORTURA



0

6. AGRESIONES Y ATAQUES



24

7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR



9

8. ACCESO A LA INFORMACIÓN



6

9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS



6

10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL



7

11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL CONTRARIO A LAS NORMAS

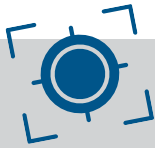


0

12. RESTRICCIONES DE INTERNET



25



ENFOQUE: Amenaza No Estatal

Los actores no estatales constituyen un gran riesgo para el periodismo en Ecuador. El 26 de marzo de 2018, Javier Ortega, reportero, Paúl Rivas, fotógrafo y Efraín Segarra, presentador de noticias, fueron secuestrados y asesinados mientras se encontraban realizando su labor periodística en Mataje, provincia de Esmeraldas ubicada cerca de la frontera con Colombia. Estos periodistas, quienes trabajaban para el periódico ecuatoriano El Comercio, fueron víctimas de grupos armados disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Este deplorable incidente ha añadido los temas de seguridad, incluyendo seguridad digital, integridad física y bienestar psicológico, entre otras, a las preocupaciones que enfrenta el periodismo en Ecuador. El crimen organizado y otros actores no estatales son definitivamente una causa de preocupación.

• Recomendaciones

Existe una clara necesidad de un sistema mediante el cual el estado pueda promover una sociedad que brinde un amplio reconocimiento al papel del periodismo, así como a la implementación de salvaguardas holistas para periodistas. Con respecto a la creación del Comité de Protección de Periodistas, una iniciativa de la sociedad civil, que se ha reconocido como un paso importante, pero que se debe llevar más allá. Deben diseñarse e implementarse medidas especiales para reducir los riesgos generados por actores no estatales. Adicionalmente, se deben realizar esfuerzos para consolidar los cambios positivos resultantes de la transición entre el gobierno de Correa y el gobierno de Moreno. Estas medidas deben incluir estrategias que puedan transformar a las autoridades locales y oficiales de rango medio de detractores a aliados del periodismo independiente.



Honduras



• Contexto

Honduras enfrenta grandes problemas relacionados con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Todos ellos han empeorado desde la reelección de Juan Orlando Hernández como presidente. Agresiones apoyadas por el estado en contra de periodistas, ataques contra su propiedad y equipos son constantes y se quedan en la impunidad.

Persecución, acoso, vigilancia, censura y auto censura crean un círculo vicioso que ahoga la calidad del periodismo independiente. La hostilidad institucionalizada desde las estructuras de poder político y económico del país en contra del derecho a protestar y al derecho de los periodistas a cubrir dichas protestas ha erosionado los espacios cívicos y los han convertido en una empresa de alto riesgo. Este factor ha empeorado después de diciembre 2017 cuando Juan Orlando Hernández impuso su poder frente a protestas causadas por el generalizado malestar en rechazo a lo que parecía ser los resultados de una elección fraudulenta. Más de 30 personas fueron asesinadas, número confirmado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Por lo menos cinco personas fueron encarceladas como forma de retaliación política y los medios de comunicación que diferían en opinión de la línea oficial fueron atacados. Esta limitación y reducción del espacio cívico para un debate público abierto es una seria amenaza a la democracia y los derechos humanos en Honduras.

• Alertas

A lo largo de 2018, el 57.5% de las alertas registradas en Honduras estuvieron relacionadas con agresiones y ataques contra periodistas. La mayoría de ellas ocurrieron en el contexto de coberturas periodísticas de protestas por parte de ciudadanos hondureños. Muchos de estos ataques incluyeron la destrucción o confiscación de equipo periodístico. Amenazas de agresiones y ataques también fueron muy comunes, conduciendo al desplazamiento obligado de por lo menos un periodista. Las violaciones relacionadas con el acceso a la información sumaron el 12.6% de las alertas registradas. Estas violaciones contra la libertad de prensa y la libertad de expresión llevaron a restringir la habilidad de los periodistas de informar a la población sobre la sangrienta represión de las protestas por parte del estado. De las 80 alertas registradas en Honduras en 2018, el 69% fueron identificadas como perpetradas por el estado.

HONDURAS

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018



✓ VISIÓN GENERAL



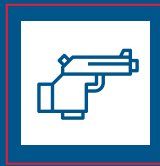
Acontecimientos con indicios de discriminación de género.



Incidentes perpetrados por funcionarios del Estado.

✓ CASOS POR INDICADORES

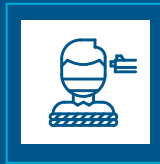
1. ASESINATOS



2. SECUESTROS



3. DESAPARICIONES FORZOSAS



4. DETENCIONES ARBITRARIAS



5. TORTURA



6. AGRESIONES Y ATAQUES



7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR



8. ACCESO A LA INFORMACIÓN



9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS



10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL

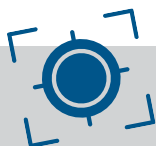


11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL CONTRARIO A LAS NORMAS



12. RESTRICCIONES DE INTERNET





ENFOQUE: El Secreto como una Política de Estado

Honduras se ha convertido en el país de los secretos. La Ley Oficial de Secretos y Desclasificación de Información Pública aprobada exonera a más de 20 instituciones públicas de brindar acceso a información relacionada con sus acciones en asuntos de interés público. Esta es una herramienta efectiva del gobierno para ocultar información sobre asuntos tales como seguridad y defensa, presupuestos y compras públicas. Coloca a estas instituciones más allá del alcance de la ley para acceso a la información pública. Parece ser que el Instituto de Acceso a Información Pública declarará que la información relacionada con problemas de recursos naturales, tales como estudios de impacto social y ambiental para proyectos será confidencial. Esto resulta preocupante dada la importancia de las actividades económicas extractivas tales como la minería; lo cual bien podría resultar en abusos contra los derechos territoriales, indígenas y ambientales, así como en la criminalización de la resistencia en contra de estos proyectos.

• Recomendaciones

Resulta imperativo asegurar que la legislación civil y penal en Honduras cumpla con las normas propugnadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyendo la protección a periodistas contra procesos judiciales arbitrarios y maliciosos. Los análisis comparativos interamericanos sobre libertad de prensa y libertad de expresión brindan un claro plan de ruta. Los crímenes de calumnia y difamación deben ser procesados primariamente a través de canales civiles. El sistema legal actual es un arma contra la libertad de prensa y la libertad de expresión y debe ser reformada. Más aún, los mecanismos existentes para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos como es el caso de fiscales especiales para derechos humanos deben ser rápidos y estar en capacidad de enfrentar a actores poderosos. El sistema judicial debe garantizar el acceso a la justicia, donde la impunidad es un problema mayor. La comunidad internacional, incluyendo organismos regionales y mundiales de derechos humanos, deben acompañar este proceso con un papel de observatorio para combatir la impunidad.



Nicaragua



• Contexto

La libertad de prensa y la libertad de expresión se han deteriorado gradualmente en Nicaragua en los 11 años desde que Daniel Ortega regresó a la presidencia. El periodismo se ha convertido en un trabajo de alto riesgo. La censura, más notablemente visible está en la forma de una prohibición estrictamente promovida contra los periodistas independientes que cubren actividades de las instituciones públicas y gubernamentales, lo cual se visibiliza a través de intervenciones militares a salas de noticias, criminalización y encarcelamientos como ataques proferidos por el gobierno en contra de la prensa libre.

Entre abril y diciembre de 2018, más de 73 periodistas huyeron del país para proteger sus vidas y libertades. Muchos continúan su trabajo periodístico desde el extranjero. Sin embargo, sus familiares que se quedaron han sido identificados como blancos.

El estado es el perpetrador más frecuente de ataques contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, especialmente después de las protestas nacionales masivas de abril 2018. Simpatizantes del partido gobernante FSLN y grupos paramilitares que responden a intereses del gobierno de Ortega también tienen una considerable cuota de violaciones. El ente regulador estatal es responsable de ataques sistemáticos contra la prensa libre, incluyendo acoso administrativo y judicial.

Nicaragua ha tenido una ley de acceso a la información pública durante 12 años, la cual, nunca ha sido puesta en práctica. La política oficial del régimen es el secreto y un estricto control para asegurar que solo sus propios periodistas tengan acceso a la información convenientemente entregada por el mismo gobierno. Entre enero y marzo de 2018, antes de que la actual crisis democrática y de derechos humanos iniciara, el 87% de todas las violaciones en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión estaban dentro de la categoría de acceso a la información.

• Alertas

Durante 2018, 234 alertas correspondientes a violaciones contra la libertad de prensa y la libertad de expresión fueron registradas en Nicaragua. De éstas, el 53% fueron por casos de agresiones y ataques, 12% correspondieron a detenciones arbitrarias, 10% a restricciones de acceso a la información u obstrucciones directas al trabajo periodístico, y 9% correspondieron al uso abusivo del poder estatal. Un periodista, Ángel Gahona, fue asesinado y se registraron seis desapariciones forzadas y dos casos de tortura. El estado es el perpetrador más frecuente de los ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión, con un 57% del total de las alertas registradas. Simpatizantes del partido político gobernante FSLN y grupos paramilitares que responden a intereses del gobierno de Ortega también tiene su cuota considerable de participación en las violaciones. Sin embargo, estos ataques no han sido tratados como violaciones cometidas por el estado.

NICARAGUA

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018



✓ VISIÓN GENERAL



Acontecimientos con indicios de discriminación de género.



Incidentes perpetrados por funcionarios del Estado.

✓ CASOS POR INDICADORES

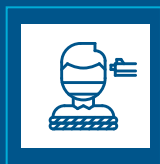
1. ASESINATOS



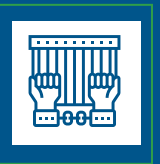
2. SECUESTROS



3. DESAPARICIONES FORZOSAS



4. DETENCIONES ARBITRARIAS



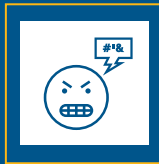
5. TORTURA



5. TORTURA



7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR



8. ACCESO A LA INFORMACIÓN



9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS



10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL



11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL CONTRARIO A LAS NORMAS



12. RESTRICCIONES DE INTERNET





ENFOQUE: Terror y Resistencia

Los ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua han crecido gravemente en el contexto de la rebelión civil que estalló en Abril de 2018. En diez meses, periodistas han sido asesinados, atacados, criminalizados, acosados, han sido víctimas de discursos de odio, detenciones ilegales, robo y destrucción de sus equipos. Ángel Gahona fue asesinado el 21 de abril de 2018 en vivo mientras cubría el inicio de las revueltas sociales en contra del gobierno de Ortega.

Los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora son prisioneros políticos; ellos han sido acusados y juzgados de manera irregular bajo cargos de conspiración para cometer actos terroristas. Su medio de comunicación, 100% Noticias, fue invadido por la policía y confiscado de facto. Lo mismo ocurrió con la sala de noticias y set de televisión de Confidencial, cuyas instalaciones se mantienen ocupadas por la policía. Su director, Carlos Fernando Chamorro, es uno de docenas de periodistas nicaragüenses obligados a huir al exilio. El periodismo independiente está bajo fuego por parte de un régimen opresivo y extremadamente violento de Nicaragua.

El estado viola su mandato de garantizar los derechos de los periodistas al convertirse en cambio en el primer atacante en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sin embargo, la calidad y resiliencia de los periodistas y medios de comunicación nicaragüenses han creado una oleada sin precedentes de apoyo popular y nuevos lectores. El periodismo independiente nicaragüense se ha convertido en el símbolo nacional y regional de resistencia en la lucha contra un estado de terror.

• Recomendaciones

Es importante comprender que la crisis nicaragüense se mantiene. La libertad de prensa y la libertad de expresión en el país están todavía bajo estado de emergencia. Se necesita máxima presión tanto a nivel nacional como internacional para restablecer por completo las libertades fundamentales en Nicaragua. Los periodistas del país necesitan apoyo tanto dentro de Nicaragua como en el extranjero, ya que aquellos que se quedaron en el país son extremadamente vulnerables y aquellos quienes se vieron forzados a exiliarse, con frecuencia enfrentan una falta de recursos para realizar su trabajo. Demandas legales estratégicas deben realizarse en el marco de trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por las violaciones perpetradas por parte del Gobierno Ortega Murillo en contra de periodistas y medios de comunicación en Nicaragua.



Perú



• Contexto

El abuso del poder del estado es la principal amenaza en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Perú. Los periodistas y medios de comunicación enfrentan represalias en la forma de acusaciones y procedimientos legales sobre las bases de presuntos crímenes relacionados con difamación y calumnia. Tal es el caso en contra de Pedro Salinas y Paola Ugaz, periodistas independientes que denunciaron los abusos cometidos dentro de Sodalicio Vida Cristiana, una organización religiosa. El juicio en contra de ellos constituye una venganza por su papel al realizar y publicar investigaciones periodísticas que comprometieron a oficiales gubernamentales y a un sector de la Iglesia Católica por sus lazos con actos de corrupción. El sistema de justicia también ha sido utilizado para amenazar la libertad de prensa y la libertad de expresión en otras formas. El 12 de julio de 2018 los directores periodísticos de IDL-Reporteros, un colectivo de periodismo investigativo y Panorama, un programa de Panamericana Televisión, fueron citados por el Fiscal General de Control Interno para que revelaran la fuente de audios publicados por ambos medios de comunicación donde se revelaban actos de corrupción dentro de la función judicial. Estas medidas constituyen un acto de intimidación violando el derecho a la confidencialidad de las fuentes, el cual está garantizado por la constitución y es esencial para el trabajo periodístico.

Intentos por controlar la prensa y violar la libertad de expresión muestran diferentes características a nivel local. Los medios de comunicación más allá de los centros urbanos más importantes del país dependen grandemente de la publicidad estatal. La asignación de propaganda estatal es utilizada como una herramienta primaria de coerción contra los medios de comunicación en este contexto. Los periodistas y medios de comunicación que cuestionan el poder y buscan mantenerse imparciales terminan en una lista negra. Por otro lado, quienes promulgan propaganda leal y aquellos medios que deciden mirar para otro lado, son recompensados. El periodismo es una profesión vulnerable en Perú, con problemas que incluyen salarios bajos, alto grado de informalidad y un irrespeto generalizado por los derechos laborales de los periodistas. Esta vulnerabilidad sumada a la abusiva asignación de presupuestos estatales para publicidad, llevan a muchos periodistas y medios de comunicación a comprometer su línea editorial por miedo a perder acceso a su ya escaso ingreso. La “Ley Mulder” (N° 30793) claramente intenta debilitar al periodismo independiente al prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación que no pertenezcan al estado. El Tribunal Constitucional declaró esta ley inconstitucional.

• Alertas

Un total de 13 alertas se registraron en Perú por violaciones en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión en 2018. Las agresiones y ataques constituyeron un 38% de estas alertas. Políticos y crimen organizado son factores agravantes relacionados con este tipo de violaciones. Dos alertas se relacionaron con el Partido político Fuerza Popular. Miembros de este partido político y seguidores atacaron físicamente y destruyeron el equipo de un fotógrafo mientras este cubría una manifestación de apoyo a Keiko Fujimori, quien se encuentra actualmente recluida en una cárcel para mujeres en Lima bajo cargos de lavado de dinero. Actores no estatales tales como el crimen organizado y traficantes de drogas son señalados en relación a tres alertas registradas durante este período. El uso abusivo del poder estatal constituye

un 31% de las alertas registradas en Perú en 2018. Dos de ellas relacionadas con órdenes judiciales que exigen que las fuentes periodísticas sean reveladas, lo que constituye una clara violación a las normas internacionales de protección de fuentes. Dos alertas estuvieron relacionadas con grupos políticos dentro del Congreso nacional quienes pretendían introducir medidas para censurar contenido. Finalmente, el 23% de las alertas corresponden a procedimientos judiciales en contra de periodistas. Estos procesos legales están siendo utilizados en Perú para tratar de censurar a la prensa especialmente cuando cubre temas sensibles como los casos arriba mencionados en contra de la Iglesia Católica y oficiales gubernamentales corruptos.



ENFOQUE: La Amenaza del Crimen Organizado en las Provincias

Amenazas y censura también están presentes en áreas rurales con crecientes conflictos sociales relacionados con las actividades económicas de extracción, tráfico de drogas y minería ilegal. Los ataques de esta naturaleza son especialmente frecuentes en el interior del país, dentro del marco de situaciones regionales y locales donde el crimen organizado es el poder reinante. Dos alertas cruciales se registraron en la región sureste de Madre de Dios. El 6 de Enero de 2018, temprano en la mañana, el auto de Juan Berríos Jiménez fue incendiado justo afuera de su casa. El periodista acusó públicamente al alcalde de Iberia, Julián Toledo Huamán, denunciando que él había tratado de amedrentarlo para que no publicara sus presuntos actos de corrupción. Manuel Calloquispe, corresponsal para Latina y El Comercio en la misma región ha sufrido amenazas de una organización criminal. Él cubrió una audiencia de prisión preventiva que involucraba a miembros de este grupo. Estos casos agravan el contexto de violencia al interior del país, el cual se ejemplifica de mejor manera con el trágico asesinato del periodista Hernán David Choquepata Ordóñez en Camaná, Arequipa, al sur del país hacia finales de 2016. A él le dispararon en la cabeza dentro de su cabina de radio mientras transmitía su programa. Este crimen se mantiene impune hasta el día de hoy.

• Recomendaciones

Deben realizarse grandes esfuerzos para identificar y sistematizar el abuso del poder del estado para debilitar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Estos esfuerzos deben ser desarrollados dentro del marco de trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de generar presión nacional e internacional para detener estos abusos. Más aún, las OSC y los medios de comunicación deben trabajar conjuntamente a fin de comprender de mejor manera y mitigar los riesgos asociados con actores no estatales, especialmente fuera de los centros urbanos primarios. Finalmente, es importante fortalecer las capacidades y conocimiento de los ecosistemas de medios de comunicación independiente de Perú con respecto al emprendimiento y resiliencia, a fin de limitar el impacto negativo de condiciones económicas desfavorables tales como la asignación abusiva de publicidad estatal.

PERÚ

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018



✓ VISION GENERAL



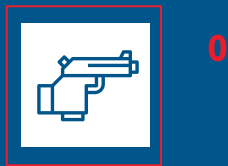
Acontecimientos con indicios de discriminación de género.



Incidentes perpetrados por funcionarios del Estado.

✓ CASOS POR INDICADORES

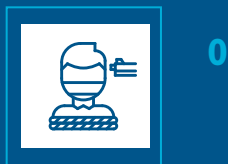
1. ASESINATOS



2. SECUESTROS



3. DESAPARICIONES FORZOSAS



4. DETENCIONES ARBITRARIAS



5. TORTURA



6. AGRESIONES Y ATAQUES



7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR



8. ACCESO A LA INFORMACIÓN



9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS



10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL



11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL CONTRARIO A LAS NORMAS



12. RESTRICCIONES DE INTERNET





Uruguay

• Contexto

A pesar de un ambiente en general favorable para la libertad de prensa y la libertad de expresión, algunas alertas se registraron en Uruguay en 2018 relacionadas con incidentes que – de acuerdo con normas internacionales y regionales – constituyen violaciones, y amenazan a periodistas y su trabajo.

Aunque no se registraron alertas mayores o graves en el período cubierto por este reporte, es importante anotar que el ataque en contra de la periodista Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas, se mantiene impune desde 2017, ya que el caso no ha sido resuelto y los perpetradores no han enfrentado a la justicia.

La sostenibilidad de medios de comunicación independientes es una de las amenazas más importantes a la libertad de prensa y la libertad de expresión en Uruguay. Los medios de comunicación independientes en el país están enfrentando una fuerte crisis financiera y en su modelo de negocios, lo que ha llevado a muchos periodistas a perder sus trabajos. Las drásticas reducciones en presupuesto de publicidad en los últimos años han tenido un impacto negativo en la sostenibilidad de todo el ecosistema de medios de comunicación.

• Alertas

A lo largo de 2018, se registraron 12 alertas contra la libertad de prensa y la libertad de expresión en Uruguay. Las agresiones y ataques constituyeron un 41.6% de las alertas. Mientras que un 33.3% de las alertas estuvieron enlazadas con procedimientos judiciales en contra de medios de comunicación y periodistas; el estado fue el perpetrador en la mayoría de ellas. El estado también fue identificado como perpetrador en una alerta relacionada con el discurso estigmatizador y una alerta se relacionó con acceso a la información.

Estos casos muestran que incluso si el Estado no es responsable por las agresiones y los ataques en contra de periodistas, los operadores políticos todavía ven al aparato estatal como una herramienta a ser utilizada en contra de reporteros a los que consideran sus adversarios. Más aun, existe una alerta por marco jurídico en contra de las normas.

El 24 de abril de 2018 la rama ejecutiva del gobierno insertó un preocupante artículo a un decreto que regula la Ley para Recursos Hidro-biológicos, afectando de manera negativa el acceso a la información y estableciendo un mecanismo para censurar el trabajo científico y académico.

URUGUAY

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018



VISION GENERAL



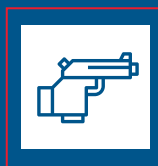
Acontecimientos con indicios de discriminación de género.



Incidentes perpetrados por funcionarios del Estado.

CASOS POR INDICADORES

1. ASESINATOS



0

5. TORTURA



0

9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS



4

2. SECUESTROS



0

6. AGRESIONES Y ATAQUES



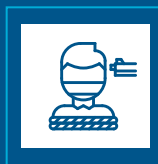
5

10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL



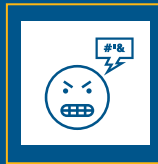
0

3. DESAPARICIONES FORZOSAS



0

7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR



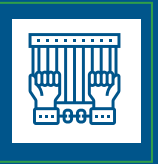
1

11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL CONTRARIO A LAS NORMAS



1

4. DETENCIONES ARBITRARIAS



0

8. ACCESO A LA INFORMACIÓN

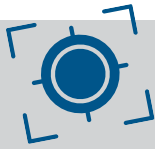


1

12. RESTRICCIONES DE INTERNET



0



ENFOQUE: Progreso en Acceso a la Información

El año 2018 marcó el décimo aniversario de la aprobación de la Ley para Acceso a la Información Pública en Uruguay. Este fue un acontecimiento digno de celebrarse ya que contribuyó de manera efectiva con mayor transparencia alrededor de asuntos de estado e interés público. Sin embargo, asegurar la correcta aplicación de la ley constituye una batalla constante. Muchos sectores dentro del estado han fallado en cumplir con sus obligaciones con respecto al acceso a la información pública y no existe un mecanismo de aplicación vinculante que garantice su cumplimiento. Con respecto a la transparencia activa, también hay un progreso en el cumplimiento por parte de las instituciones públicas en términos de publicar información en sus sitios en internet. Pero aún hay mucho por mejorar, por ejemplo las instituciones públicas revisadas solo cumplieron con el 56% de sus obligaciones relacionadas con transparencia activa.

• Recomendaciones

El ambiente altamente fuerte de Uruguay que permite la libertad de prensa y la libertad de expresión no puede llevarnos a la complacencia. El ataque en contra de la periodista Isabel Prieto de la revista Caras y Caretas debe ser llevado ante la justicia. Los periodistas deben estar bien entrenados en normas y mecanismos de libertad de prensa y libertad de expresión, leyes nacionales y tratados internacionales y en normas periodísticas de auto regulación ética, incluyendo periodismo digital y el uso de redes sociales. Los mecanismos existentes deben ser mejorados y los nuevos que se creen deben asegurar formas rápidas, efectivas y seguras para registrar las amenazas en contra de periodistas, especialmente aquellos que trabajan lejos de los principales centros urbanos. El estado debe mejorar la transparencia activa y el cumplimiento de leyes nacionales y tratados internacionales adoptados por el país. La sociedad civil tiene que monitorear este cumplimiento. El estado debe garantizar el acceso a la información y facilitar el trabajo de los periodistas, especialmente en contextos importantes tales como elecciones y asuntos de interés público. Los procesos transparentes y supervisados deben ser implementados para prevenir abusos en casos en los cuales las instituciones estatales buscan excepciones para evitar publicar información. Los ciudadanos deben empoderarse de su derecho a acceder a la información pública, considerando que este tema es de suma importancia para periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Los medios independientes de comunicación necesitan conseguir mayor apoyo mediante el llenado de los vacíos creados por el debilitamiento de los medios tradicionales de comunicación. Es de crucial importancia una ley que regule la producción, planeación y asignación de publicidad estatal, misma que sea aprobada antes del final del ciclo legislativo actual para consolidar ese nuevo paso hacia la democracia uruguaya con respecto a una prensa libre fuerte y a la transparencia en el uso de recursos públicos.



Venezuela

• Contexto

La situación de Venezuela con respecto a la libertad de prensa y la libertad de expresión es crítica. Los ataques más frecuentes contra la libertad de prensa y la libertad de expresión están relacionados con el abuso de poder, especialmente por parte del estado. La censura ha debilitado a los periodistas tradicionales y digitales y a los medios de comunicación. En el ámbito digital Armando.info, El Pitazo, El Nacional, Cactus24 y La Patilla fueron bloqueados en 2018. Proveedores de servicio de internet privados y estatales han bloqueado arbitrariamente estos sitios violando el debido proceso, el cual exige una orden judicial y una justificación oficial para la aplicación de estas medidas. Estos bloqueos son implementados a través de censura de DNS y HTTP, que intermitentemente bloquean los puertos de conexión en los servicios de internet proveídos por CANTV, Movistar, Movilnet y Digitel. Los periodistas enfrentan restricciones de viaje u otras medidas por parte de autoridades gubernamentales que violan su libertad de movilización. Procedimientos judiciales dedicados han convertido a las cortes en instrumentos de acoso contra periodistas, editores y medios de comunicación; Tal Cual, El Nacional, La Patilla, Correo del Caroní, y Armando.info todos ellos enfrentan cargos por calumnia.

Impedimentos para acceder a la información es otra de las mayores amenazas. Los indicadores y estadísticas oficiales no se publican con la calidad o regularidad requeridas; esto significa una censura a la información más básica necesaria para evaluar la situación económica del país como es el caso de la inflación y el PIB. El gobierno ha fallado en publicar la Ley de Presupuesto Nacional por tres años, convirtiendo de facto a esta información en un secreto de estado. El Instituto Nacional de Estadísticas no ha realizado un censo de población y vivienda desde 2011, creando un enorme vacío en la información demográfica. Otro indicador del bienestar social, las tasas de mortalidad materna e infantil, o información con respecto a epidemias se ha mantenido en la obscuridad desde 2012. La política del gobierno está basada en una completa falta de transparencia y acceso a la información relacionada con temas de interés público.

Las restricciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión en Venezuela están intrínsecamente unidas a la abrumadora debilidad institucional y a la falta de leyes. Las garantías económicas, legales y políticas son débiles o inexistentes. La mala información y la propaganda proselitista han secuestrado por mucho tiempo la agenda pública a nivel nacional. Durante los últimos 10 años el estado ha abusado de los recursos públicos para campañas de comunicación favorables a ellos en el ámbito político. La venta forzada de medios de comunicación y cambios drásticos en líneas editoriales, censura y auto censura, han flagelado a periodistas venezolanos y medios de comunicación como resultado de un deliberado plan gubernamental de ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión.

• Alertas

En 2018, se registraron 196 alertas en Venezuela. Las más atroces incluyen el asesinato del camarógrafo Manuel Pareo, un caso de secuestro, y un caso de desaparición forzada entre las alertas más graves. La prensa independiente está enfrentando uno de sus

momentos más oscuros en la historia del país. El estado ha orquestado una escasez de papel, tinta y otros suministros amenazando su supervivencia misma. El uso abusivo de poder estatal alcanza el 31.6% de las alertas registradas en un intento del régimen de Maduro y sus operadores por silenciar a los periodistas. Las agresiones y ataques alcanzan el 20.9% de las alertas, donde el 19.3% están relacionadas con acceso a la información; el estado ha sido identificado como el perpetrador en la mayoría de los casos. En este periodo, el 13.2% de todas las alertas estuvieron relacionadas con restricciones de internet. Existieron doce alertas relacionadas con la detención arbitraria de periodistas nacionales e internacionales. Operadores políticos también utilizaron el sistema judicial para intimidar a periodistas, con ocho casos registrados de procedimientos judiciales en contra de medios de comunicación y periodistas. Preocupantemente, el estado ha sido identificado como perpetrador en el 62% de todas las alertas registradas en Venezuela. Esto no toma en cuenta las violaciones cometidas por seguidores del régimen de Maduro que con frecuencia actúan en su nombre o en beneficio del Estado.



ENFOQUE: La Crisis de los Medios Impresos

Los medios impresos han enfrentado una crisis particularmente grave en 2018: 35 medios han dejado de circular debido a las limitaciones para comprar e importar papel y otros insumos. Preocupa conocer que 22 de estas suspensiones han sido definitivas, mientras que solo 6 fueron temporales. Adicionalmente 16 periódicos han sido forzados a implementar interrupciones intermitentes en su circulación, con 14 más que han pasado de tener circulación diaria a semanal u otros recortes en la frecuencia de su publicación. Estas medidas han sido tomadas para alargar sus existencias de papel y reducir los costos de producción. Antes de que se iniciara ésta crisis, existían 90 medios escritos en 20 regiones del país. Hoy apenas existen 30, una reducción del 68%. En cuatro regiones, Apure, Sucre, Portuguesa y Barinas, ya no se puede encontrar prensa escrita, y la mayoría del tiempo es un periódico a favor del gobierno el que es capaz de sobrevivir debido a favoritismos al momento de asignar publicidad estatal.

● Recomendaciones

Las violaciones en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Venezuela están relacionadas con la profunda crisis social, económica y política. En el contexto del tenso ambiente de Venezuela, la censura estatal y la represión podrían empeorar. Por lo tanto, el continuar monitoreando las violaciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión resulta esencial. El estado venezolano tiene que garantizar las condiciones de seguridad que permitan a los periodistas y medios de comunicación

ejercer su trabajo de manera libre, sin violencia física y psicológica; esto incluye prevenir e investigar casos donde la libertad de prensa y la libertad de expresión estén en riesgo. Al contrario, el estado ha sido identificado como el principal perpetrador de los ataques en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión. La aprobación de la Ley Anti Odio por parte de la Asamblea Nacional Constituyente promueve que las autoridades ejerzan la censura siempre que una investigación o reporte incite al odio. La ley incluye sentencias que van de 10 a 20 años de cárcel para periodistas y medios de comunicación que no cumplan con la censura exigida por las autoridades. El Artículo 27 de la Ley sobre Responsabilidad Social en la Radio, Televisión y Medios Electrónicos establece las condiciones para la regulación y prohibición de contenido. Ambas normas además de obstaculizar la libertad de prensa y la libertad de expresión en un contexto ya de por sí precario deben ser reescritas de acuerdo con normas internacionales. Las políticas públicas relacionadas con el acceso a internet han sido limitadas por procesos regulatorios que afectan la competitividad de mercado y los incentivos para la inversión. Esto ha tenido un impacto negativo en los avances tecnológicos en el sector de telecomunicaciones. Las políticas relacionadas con acceso a internet deben ser guiadas por principios de inclusión, diversidad, apertura, competencia y libertad.

VENEZUELA

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ENERO - DICIEMBRE 2018

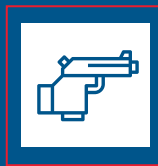


VISION GENERAL



CASOS POR INDICADORES

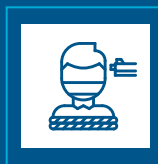
1. ASESINATOS



2. SECUESTROS



3. DESAPARICIONES FORZOSAS



4. DETENCIONES ARBITRARIAS



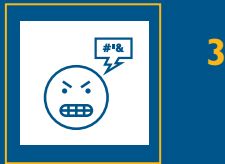
5. TORTURA



6. AGRESIONES Y ATAQUES



7. DISCURSO ESTIGMATIZADOR



8. ACCESO A LA INFORMACIÓN



9. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS



10. USO ABUSIVO DEL PODER ESTATAL



11. MARCO DE TRABAJO JUDICIAL CONTRARIO A LAS NORMAS



12. RESTRICCIONES DE INTERNET



● CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REGIONALES

El progreso de Latinoamérica hacia el ODS 16 y el objetivo 16.10 ha sido limitado. La Libertad de Expresión ha mejorado ligeramente, de acuerdo con el último reporte de Reporteros Sin Fronteras. Aun así varias sociedades Latinoamericanas continúan enfrentando graves problemas relacionados con la libertad de prensa y la libertad de expresión: políticas de estado autoritarias que atacan a la prensa, retorno y fondos limitados para medios independientes de comunicación, violencia extrema en contra de periodistas e impunidad creciente. Para acelerar el progreso hacia el ODS 16 y el objetivo 16.10 en Latinoamérica, varios participantes en los ecosistemas de medios de comunicación en la región deben colaborar para mejorar la capacidad para medir el estado e impacto del periodismo independiente así como para construir un ambiente que permita la sostenibilidad económica, política y social de una prensa libre.

Los retos y limitaciones pertenecientes al ODS 16 que son monitoreados están señalados a lo largo de este reporte. Los casos más allá de graves, tales como asesinatos y encarcelamientos, son difíciles de categorizar y documentar de manera estandarizada. Los obstáculos importantes como las barreras financieras y las externalidades tales como leyes débiles han tenido un gran impacto y aun así no han sido consideradas. El acoso es con frecuencia utilizado como un medio de cohesión. Resulta difícil monitorear la efectividad de las leyes de acceso a la información de una manera metodológica consistente que pueda facilitar comparaciones a través de países. El seguimiento y análisis de los ataques registrados en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión es débil.

● Recomendaciones para Periodistas y Sociedad Civil:

1. **Medidas:** Se deben construir amplias coaliciones con diferentes actores que presenten herramientas, perspectivas y competencias específicas a fin de monitorear y dar seguimiento a cada una de las muchas condiciones que deben cumplirse para completar el ODS 16. Los indicadores en la base deben ser detallados y ser rigurosos y distinguir claramente entre los diferentes tipos de acoso, tomando en cuenta fenómenos tales como la persecución judicial y la asfixia financiera. Estos indicadores deben alimentar coeficientes complejos y metodológicamente fuertes a fin de favorecer las comparaciones y análisis regionales y globales.

- 2. Emprendimiento:** Un proceso similar debe realizarse para medir los retornos económicos, políticos y sociales del periodismo independiente. El sector de la comunicación en Latinoamérica es propicio para un enfoque de emprendimiento social donde los medios de comunicación puedan florecer a través de una mezcla de cooperación de desarrollo, inversión de impacto y corrientes de retorno sostenible tales como publicidad, financiamiento cooperativo (crowdfunding), modelos de membresía y nuevas unidades de negocios innovadores. Aprender a medir los retornos no financieros sobre la inversión en periodismo de calidad debe ser un inmenso estímulo para el ecosistema. Se debe desarrollar la viabilidad económica, política y social de modelos de ecosistemas de medios independientes de comunicación; así como en cualquier otra industria estos deben ser justos, claros y favorecer la innovación. Por ejemplo, los medios que favorecen las estructuras de poder económico y político no deben tener ventajas ilegítimas en los mercados de trabajo. Los medios de comunicación y los periodistas deben invertir en entender a sus audiencias a través de la investigación para construir lealtad. Esto se traduce en la disposición a brindar apoyo financiero, pero también apoyo social, por ejemplo, protestando en caso de un ataque en contra de los medios de comunicación y periodistas. En un nivel político, la sociedad civil debe construir y promover una agenda que fortalezca la capacidad técnica del estado para cumplir su papel de garante de los derechos, creando simultáneamente un sistema de revisiones y balances para mantener la responsabilidad y credibilidad de los estados..
- 3. Género:** La violencia y el acoso que enfrentan las periodistas mujeres en Latinoamérica puede no ser capturada apropiadamente por las metodologías actuales de monitoreo. Los indicadores deben ser capaces de identificar la violencia de género tanto en el trabajo de campo como en la sala de noticias. El acoso sexual, el abuso psicológico, los ataques en redes y otras formas de abuso son crecientes y en muchos casos los perpetradores son los mismos colegas. Las brechas en salarios debido al género es otra causa de preocupación dentro del periodismo. Las periodistas mujeres tienden a ser afectadas con mayor frecuencia por condiciones de trabajo precarias, son forzadas a trabajar sin contratos, sin protecciones sociales, pensiones, vacaciones pagadas y otros beneficios sociales. La discriminación que sufren las periodistas mujeres en sus carreras y comunidades deben ser señalada. Los empleadores deben asumir su responsabilidad por la seguridad y bienestar de las periodistas mujeres a través de políticas y mecanismos de género adecuados.

• Recomendaciones para Gobiernos y Autoridades

- 1. Protección a periodistas, Prevención de violaciones y Procesamiento a perpetradores de crímenes contra periodistas:** Los estados y gobiernos deben establecer e implementar medidas específicamente diseñadas para mejorar la seguridad de los periodistas de manera que ellos puedan ejercer sus derechos y realizar su trabajo en un ambiente libre de violencia e intimidación. Estas medidas deben buscar principalmente la protección de la vida, la integridad y la propiedad de periodistas y medios de comunicación, pero principalmente deben ir más allá hacia la creación de un ambiente que fomente el trabajo periodístico, que distribuya de manera equitativa y sin discriminación política los recursos públicos destinados a publicidad (donde estén disponibles de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales), cumpliendo con las normas internacionales de transparencia y confiabilidad. El entendimiento de los Estados sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión deberá incluir tanto la libertad negativa como la libertad positiva. Los Estados deben propender a un ecosistema de medios que no sea libre únicamente de violencia y restricciones sino que además fomente y promueva activamente el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión y una prensa independiente que sirva como un contrapeso frente a los poderes políticos y económicos. Un enfoque positivo de libertad para la libertad de prensa y la libertad de expresión significa crear y apoyar con actitudes, instituciones y estructuras que creen y sostengan sociedades abiertas y confiables, prerequisites para una democracia funcional y sociedades más justas e inclusivas. Desde la perspectiva de libertad negativa, erradicando la impunidad de crímenes en contra de periodistas como una prioridad máxima..
- 2. Plataformas Nacionales / Coaliciones para la Medida y Promoción del ODS 16:** Los Estados deben formar coaliciones con múltiples participantes y plataformas nacionales para monitorear, hacer seguimiento y revisar el progreso hacia todos los ODS y en particular hacia el ODS 16. Las coaliciones y plataformas deben ser abiertas, amplias e inclusivas y deben tener en consideración al gobierno, los medios y las organizaciones de derechos humanos. El alcance debe también incluir el monitoreo a las violaciones de libertades de los defensores de derechos humanos y los líderes sindicales. Se debe realizar un esfuerzo para monitorear el ODS indicador 16.10.2 “Número de países que adoptan e implementan garantías constitucionales, estatutos y/o políticas para el acceso público a información”, pero el esfuerzo debe ir más allá de simplemente registrar el número de países que han establecido garantías para el acceso público a la información, enfocándose en la efectividad de dichas leyes. Una evaluación de su mera existencia no es suficiente; una evaluación de la implementación de una manera metodológicamente consistente que pueda facilitar comparaciones a través de países es necesaria. Ambos indicadores del ODS 16.10 están todavía clasificados (hasta el 4 de abril de 2019) como indicadores Tier II lo cual significa que son conceptualmente claros, tienen una metodología establecida internacionalmente y están disponibles, pero la información no se produce regularmente por parte de los países. Si el ODS debe ser alcanzado, este vacío de información debe ser abordado.

• Recomendaciones para el Sistema de las Naciones Unidas

1. **ODS 16.10.1:** Debe ser ampliado para incluir otros niveles de amenazas y restricciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión tales como barreras financieras, acoso judicial y otros que han sido documentados en detalle en este reporte.
2. **Fortalecimiento de las Oficinas Nacionales de Estadísticas (NSO):** El Sistema de Naciones Unidas debe también asumir un rol primordial para brindar asistencia para el fortalecimiento técnico y metodológico de las NSO y en la promoción y formación de Plataformas Nacionales para ODS, así como apoyar y monitorear de manera general la implementación de recomendaciones tanto a nivel de país como de región.

VOCES DEL SUR

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Con el apoyo de





A REGION SPLIT

between light and shadows

“

SHADOW REPORT ON
THE COMPLIANCE OF THE SDG 16.10.1
IN 8 LAC COUNTRIES

”



**FREEDOM OF EXPRESSION: SHADOW REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 16.10.01 IN LATIN AMERICA.**

April 18th, 2019.

The content of this report can be reproduced in any type of media and in any form, as long as the source is cited.

LEADERSHIP TEAM

Enrique Gasteazoro
Miguel Gómez
Milena García

In collaboration with:

Foro de Periodismo Argentino - **FOPEA** / Argentina
Asociación Nacional de la Prensa - **ANP** / Bolivia
Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios - **FUNDAMEDIOS** / Ecuador
Comité por la Libre Expresión - **C-Libre** / Honduras
Fundacion Violeta Barrios de Chamorro / Nicaragua
Instituto Prensa y Sociedad - **IPYS** / Perú
Centro de Archivos e Información Pública - **CAinfo** / Uruguay
Instituto Prensa y Sociedad - **IPYS** / Venezuela

● FOREWORD

When adopting the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, Member States established thematic progress reviews on the Sustainable Development Goals (SDGs). Member States agreed that the High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), under the auspices of ECOSOC, would monitor and review a yearly set of SDGs. The HLPF is called to facilitate assessments of progress on all SDGs over four-year cycles. In July 2019 the seventh session of the HLPF under the theme ‘Empowering people and ensuring inclusiveness and equality’ will complete the first cycle of thematic reviews with an in-depth analysis of SDG 4 (quality education), SDG 8 (decent work and economic growth), SDG 10 (reduced inequalities), SDG 13 (climate action) and SDG 16 (peace, justice and strong institutions), in addition to SDG 17 (partnerships for the Goals), reviewed each year.

The 2030 Agenda underlines the important role that ‘major groups’ and other stakeholders play in the pursuit of sustainable societies for future generations. UN Member States recognized that achieving sustainable development would require broad and active participation of all sectors. Following this mandate, **Voces del Sur**—a collective of Civil Society Organizations in eight Latin American countries—agreed to collaborate on the development of a shadow report on freedom of expression as a way to advocate for press freedoms and freedom of expression in the region.

This shadow report constitutes **Voces del Sur’s** effort to enrich and present complementary information to that presented by government-led Voluntary National Reviews (VNR). It offers an independent assessment based on the most recent information registered by civil society organizations regarding progress towards Goal 16, target 16.10, indicator 16.10.1, providing an overview of the main challenges, policies, partnerships and coordinated actions to enhance progress toward achieving the goal. Ultimately, it also expresses this collective’s commitment to continue working to strengthen press freedoms and freedom of expression in Latin America, which intrinsically includes monitoring and reporting on progress towards SDG 16.

● TABLE OF CONTENTS

FOREWORD	4
EXECUTIVE SUMMARY	7
INTRODUCTION	9
METHODOLOGY	11
• Methodological Challenges	13
REGIONAL CONTEXT	14
RESULTS PER COUNTRY	18
ARGENTINA	19
• Context	
• Alerts	
• In Focus: The Sustainability of the Media	
• Recommendations	
BOLIVIA	23
• Context	
• Alerts	
• In Focus: Profitable Propaganda and Financial Asphyxiation	
• Recommendations	
ECUADOR	27
• Context	
• Alerts	
• In Focus: The Non-State Threat	
• Recommendations	
HONDURAS	31
• Context	
• Alerts	
• In Focus: Secrecy as a Policy of State	
• Recommendations	
NICARAGUA	35
• Context	
• Numbers/Alerts	
• In Focus: Terror and Resistance	
• Recommendations	

● TABLE OF CONTENTS

PERU

- Context
- Alerts
- In Focus: The Threat of Organized Crime in the Provinces
- Recommendations

39

URUGUAY

- Context
- Alerts
- In Focus: Progress on Access to Information
- Recommendations

43

VENEZUELA

- Context
- Alerts
- In Focus: The crisis in print media
- Recommendations

47

REGIONAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

52

● EXECUTIVE SUMMARY

Violence and other types of attacks against journalists (threats, intimidation, legal/judicial harassment, obstruction of work, online and offline surveillance, destruction of equipment, confiscation of assets, among others) are not only crimes, but also require special consideration given the public nature of journalistic work. They represent violations of society's right to be informed. Independent journalism and the enabling environment it requires are pillars of democracy. Journalists must be able to work safely if the media is to act as a watchdog, and to draw attention to the failings of power, such as corruption, misuse of resources, and abuse.

Voces del Sur designed a set of twelve common indicators to facilitate tracking and comparing press freedoms and freedom of expression in Latin America. The common indicators are based on SDG target 16.10 and indicator 16.10.1, which focus on protecting fundamental freedoms and ensuring safety and protections for journalists. This report helps to assess progress towards SDG 16.10.1 in Latin America by evaluating the situation of freedom of expression and safety and protections for journalists in the eight countries using these common indicators. The report also provides key recommendations for strengthening these freedoms.

The CSO members of **Voces del Sur** created a tool to enable a comparative analysis regarding the status of press freedoms and freedom of expression in the region. The first five regional indicators are directly linked to indicator 16.10.1. To determine additional indicators, organizations shared the most common violations to press freedoms and freedom of expression in their countries and identified common themes. These were used to design eight additional indicators to allow common tracking across the region. Participating organizations agreed to include an indicator that would help identify when a violation was committed targeting the victim based on their gender.

In 2018 the patterns of extreme violence, impunity, and authoritarian policies towards journalists continued unabated in several Latin American countries. Using this tool, the eight member CSOs of **Voces del Sur** registered a total of 732 alerts under the twelve common regional indicators; 44 were also registered as gender alerts and a staggering 404 pertained to attacks on press freedoms and freedom of expression with the state as the perpetrator. Aggressions and attacks were the most recurring alerts at both the regional and country levels, followed by alerts related to abusive use of state power and access to information. Violations against press freedoms and freedom of expression are commonplace in the region. Journalists are still subjected to violence, intimidation and abuse, most of all when reporting on the special interests of the powerful.

The situation is not the same in every country. The dramatic inequalities that characterize the region in social and economic terms influence the situation of press freedoms and freedom of expression. While some countries in the region such as Uruguay (12 alerts) and Peru (13 alerts) could be considered safe havens for the exercise of journal-

istic work, the region also includes some of the most dangerous countries in the world for journalists such as Nicaragua (234 alerts) and Venezuela (196 alerts). This overwhelming difference is reflected among countries but also within countries. For example, while the report registered only 17 alerts for the Buenos Aires province in Argentina (the capital and most populated region), there were 34 alerts reported in the less populated regions of the countryside. Violence and intimidation against journalists seem to increase as we move further away from the main centers of development.

Challenges and limitations pertaining to the way SDG 16 is monitored remain. Cases beyond the most severe, such as murder or imprisonment, are difficult to categorize and document in a standardized way. Important obstacles such as financial barriers and externalities such as a weak rule of law have a large impact yet are not taken into account. Harassment is often used as a blanket term. It is difficult to monitor the effectiveness of access to information laws in a methodologically consistent way that can facilitate comparisons across countries. Follow-up and analysis of registered attacks against press freedoms and freedom of expression is weak. To accelerate progress towards SDG 16 and target 16.10 in Latin America, diverse stakeholders in the region's media ecosystems must collaborate to improve the capacity to measure the state and impact of independent journalism, as well as to build an environment that enables the economic, political, and social sustainability of a free press.

Nurturing this enabling environment is the responsibility of States, civil society, the media and the UN System, among others. States should strive to create an environment that is safe, free from violence and intimidation and to ensure the protection of journalists, as well as the prevention of violations, and the prosecution of perpetrators of crimes against journalists. The Latin American media sector, on the other hand, is ripe for a focus on social entrepreneurship, whereby outlets can thrive through a mix of development cooperation, impact investment and sustainable revenue streams through advertising, crowdfunding, membership models, and new innovative business units. Learning to measure the nonfinancial returns on investment in quality journalism would be a huge boost for the ecosystem. This role might be best suited for civil society. Finally, the UN System also plays a pivotal role in strengthening national capacities for reporting, monitoring and evaluation of progress towards SDG 16.

This shadow report will be presented in July 2019 at the High-level Political Forum on Sustainable Development. However, reporting should not be viewed merely as an instance of international accountability but also as a key policymaking element for the protection of journalists, the prevention of violations, and the prosecution of perpetrators of crimes against journalists, as well as a contribution to the sustainability of enabling media ecosystems. The aim of these international mechanisms is to make an impact at the national level. The presentation of reports only makes sense insofar as it fosters opportunities and dialogue among local actors and has an impact on local contexts. Thus, this report seeks to facilitate the construction of dialogues at the national as well as international level.

● INTRODUCTION

SDG 16 - **'promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels'** - is both an outcome and an enabler of sustainable development. Institutions and society are mutually reinforcing, forming either a virtuous cycle of improvement or a vicious cycle of degeneration. Open, accountable and effective public institutions lay the foundation for peace and justice while empowering civil society to engage in the design, implementation and evaluation of public policies that strengthen institutions which in turn lead to more sustainable societies.

Mutual reinforcement is also evident in target 16.10: **'ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements'**. The free flow of information is both a prerequisite for the protection of human rights and a human right in and of itself. Freedom of expression is an inalienable human right as established in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. At the same time, open and effective access to reliable public information is a necessary condition to promote citizen engagement and participation in the protection of fundamental freedoms.

In particular, Indicator 16.10.1 - **number of verified cases of murders, kidnappings, forced disappearances, arbitrary detentions and torture against journalists, media workers, labor leaders and human rights defenders**- aims to protect, among others, the rights of journalists and media outlets to conduct their work without facing violence, threats or intimidation. The indicator recognizes that fostering a diverse and plural media ecosystems with free and independent journalism fulfilling the role of watchdog and representing the voices of citizens, especially those that may be neglected, vulnerable, or left behind, is an important step in the strengthening of democracy and the accomplishment of sustainable development.

This indicator was categorized as Tier II ("conceptually clear; internationally established methodology and standard is available, but countries do not regularly produce data yet") by the Inter-agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs) based on its level of methodological development and the limited availability of data for it. The reporting mechanisms agreed upon, namely the VNRs, are voluntary and state-led, with each government deciding how these targets should be incorporated in national planning processes, policies and strategies. In a subject as sensitive as human rights and fundamental freedoms, government information cannot be trusted as a sole source of reporting, especially when these same governments might be actively violating freedoms. Therefore UNESCO has been designated by the UN Statistical Commission as a contributing agency for tracking global progress on indicator 16.10.1. In collaboration with the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) as a custodian agency, and the International Labor Organization (ILO) as partner agency, UNESCO has started working on an improved methodology for the indicator.

In this context eight Latin American civil society organizations collaborated under a common initiative, **Voces del Sur**, that seeks to strengthen and improve monitoring and alerts for freedom of expression, enhance the effectiveness of advocacy on issues of press freedoms and freedom of expression, and establish new forms of coordination and collaboration among civil society organizations in different countries. They designed a set of common indicators to facilitate tracking and comparing freedom of expression across the region. The common indicators are based on target 16.10 and indicator 16.10.1, which focus on protecting fundamental freedoms and ensuring safety and protections for journalists. This report helps to assess progress towards SDG 16.10.1 in Latin America by evaluating the situation of freedom of expression and safety and protections for journalists in eight countries using these common indicators.

The report analyzes press freedoms and freedom of expression, safety and protections for journalists, and progress towards SDG 16.10.1 based on data collected by the CSOs. It focuses exclusively on journalists, as attacks on human rights defenders and union leaders are not systematically monitored by all participating CSOs. The report also provides key recommendations for further strengthening these freedoms. It is organized using the common regional standards developed under **Voces del Sur**.

● METHODOLOGY

On October 2018, civil society organizations from seven countries in Latin America, Instituto Sociedad y Prensa (IPYS) from Peru, Asociación Nacional de Prensa (ANP) from Bolivia, FUNDAMEDIOS from Ecuador, Instituto Sociedad y Prensa (IPYS) from Venezuela, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) from Uruguay, Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) from Honduras, and Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) from Argentina came together to develop regional indicators for monitoring and reporting on violations against press freedoms and freedom of expression. These organizations worked collectively on the construction of the common regional indicators based on SDG indicator 16.10.1. Fundación Violeta Barrios de Chamorro from Nicaragua later joined the initiative and contributed insights and information to include Nicaragua in the report given the country's dire situation.

As the SDGs resulted from an inherently political process and do not comprehensively monitor all key factors, institutions and structures that are associated with press freedoms and freedom of expression. The SDG 16.10.1 framework offers an adequate, yet limited, methodology to monitor and compare the progress in ensuring public access to information and the protection fundamental freedoms. While SDG 16.10.1 focuses solely on “verified cases of murders, kidnappings, forced disappearances, arbitrary detentions and torture”, the **Voces del Sur** indicators offer a wider scope to include further relevant challenges that each one of the eight participant countries face. Thus, they account for other ways in which press freedoms and freedom of expression are restricted, like attacks that do not result in death, stigmatizing discourse, biased judicial processes and Internet restrictions.

Because these are normative assessments by **Voces del Sur** and are not official targets that were agreed upon as part of the SDG development process, the trends in this report should be interpreted with caution, and are only suggestive of whether a country is moving towards meeting its SDG16.10 target. **Voces del Sur** has included the additional indicators in order to provide a more comprehensive understanding of each country's performance on SDG16.10. It will require a sustained effort and a process of continuous improvement for the common regional indicators to reach an optimal alignment with global SDG reporting mechanisms and tools.

Voces del Sur has designed 12 common regional indicators to enhance reporting on SDG indicator 16.10.1. These are designed to comply with the 2030 Agenda's principle that Follow-up and Review (FUR) mechanisms should be inclusive, participatory, transparent, people-centered, rights-based and gender-sensitive to ensure accountability. These common regional indicators foster a more thorough understanding of the different levels of threats against press freedoms and freedom of expression in Latin America and strengthen comparative analysis across countries. The indicators are meant to serve Member States and other stakeholders to design public policies, as well as carry out lobby and advocacy to pressure for institutional changes that benefit press freedoms and freedom of expression.

12 COMMON REGIONAL INDICATORS

TO ENHANCE REPORTING ON SDG INDICATOR 16.10.1

1. MURDER



- Attacks leading to death.
- Intentional homicides as a reprisal for exercising journalism.

7. STIGMATIZING DISCOURSE



- Insults or reputational attacks coming from public officers or important public figures
- Systematic campaigns to discredit reputations

2. KIDNAPPINGS



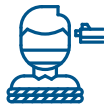
Abduction and illegal detention of one or more people against their will, even through the use of force, threat, fraud, or persuasion aiming to leverage liberation in order to obstruct, censor or negatively influence journalistic work.

8. ACCESS TO INFORMATION



- Restrictions on the right to access public information such as refusal, partial or incomplete delivery, omission.
- Obstruction of journalistic work

3. FORCED DISAPPEARANCE



Arrests, detentions or transfers against the will of journalists or relatives by government agents, organized groups acting on behalf of the government or with their direct/indirect support, who deny information about their whereabouts or situation; or deny that they are in custody, placing them outside the protection of due process and the rule of law.

9. JUDICIAL PROCEDURES AGAINST MEDIA OUTLETS AND JOURNALISTS



- Civil procedures
- Criminal procedures

4. ARBITRARY DETENTION



It is thus considered when:

- There is no legal basis that justifies the detention of journalists or their relatives
- When detention is a consequence of the exercise of freedom of expression as defined in the Universal Declaration of Human Rights

10. ABUSE OF STATE POWER



- Official propaganda/abusive allocation of State ads
- Irregular concession of frequencies
- Administrative sanctions
- Restriction on production inputs
- Closure of media outlets
- Forced rectification/removal of content without judicial order

5. TORTURE



Any act through which pain, punishment, intimidation, coercion or grave suffering, either physical or psychological, is intentionally inflicted on journalists or on their relatives

11. JURIDICAL FRAMEWORK CONTRARY TO STANDARDS



Proposal and/or approval of norms that restrict freedom of expression and/or constitute censorship.

6. AGRESSION AND ATTACKS



- Attacks against the physical integrity of journalists and/or their relatives
- Raids and/or attacks against media outlet infrastructure or the property of journalists
- Destruction or confiscation of journalistic equipment
- Forced displacement
- Threats

12. INTERNET RESTRICTIONS



- Closure and arbitrary suspension of social network accounts
- Hackings
- Cyber threats
- Selective blocking of web sites
- Using institutional accounts or the authorities to block users.

CROSS-CUTTING INDICATOR



Any event described in the 12 indicators will include an assessment to verify if there are indications of gender based discrimination.

• Methodological Challenges

SDG 16 has been described as an enabling or transformative goal because its implementation can enhance progress towards other SDGs. It is among the most ambitious goals of the 2030 Agenda and poses unique challenges in terms of both implementation and monitoring. There are numerous methodological issues, political challenges, as well as practical and implementation issues around data collection and statistical capacity that must be addressed.

SDG 16.10.1 was originally classified as a Tier III indicator, meaning that there was no internationally established methodology or standard yet available for the indicator, but methodologies and standards would be developed or tested in the future. In 2017 during the sixth meeting of the IAEG-SDGs, SDG 16.10.1 was re-classified as Tier II indicator, meaning that it is now conceptually clear, an internationally established methodology and standard is available, but countries do not regularly produce data yet. Yet another difficulty rests on the fact that national statistical offices (NSOs) cannot independently measure some targets for politically sensitive reasons. A clear example is SDG indicator 16.10.1 on the killing or arbitrary detention of journalists and human rights activists which is particularly challenging for governments to monitor faithfully.

In response to these challenges, **Voces del Sur** sought to create these common indicators to enable comparative analysis regarding the status of press freedoms and freedom of expression in the region. This effort was recognized in a 2018 publication by the Regional Bureau for Sciences in Latin America and the Caribbean / UNESCO Montevideo Office titled “The Safety of Journalists in the Human Rights and Sustainable Development Agendas: Opportunities to Improve Reporting on Human Rights Violations in Guatemala, Honduras, and El Salvador”. The regional UNESCO Office praised **Voces del Sur’s** efforts to develop these indicators. The process started on September 2017 in Ecuador. The first set of indicators was presented for consideration and validated by the IACHR Special Rapporteur for Freedom of Expression. In early 2018 the first report containing the indicators was released. Its main results were presented during the IACHR’s 167th Period of Sessions, which took place on March 2018 in Colombia. **Voces del Sur** aligned its unified monitoring system with SDG Indicator 16.10.01 during International Freedom of Expression Exchange (IFEX) meeting in Quito in April 2018.

Despite these efforts, performing a consistent trend analysis for the indicator for each country is not yet possible given the considerable data gaps that still exist. To track trends, time series data must exist to see if countries are moving towards or away from achieving the targets. As they stand, most indicators only have one year of data. Without additional data it will not be possible to understand if countries are moving in the right direction. It is clear that the availability of harmonized data to compare across countries will be critical in order to hold countries to account and help direct resources to where they are needed most. This report monitors progress towards SDG16.10.1 with the available data registered by eight CSOs in Latin America. The fact that some of the data may be partial or incomplete ought to raise awareness of the key methodological challenges related to monitoring progress towards SDG 16.

● REGIONAL CONTEXT

Independent journalism is a high-risk occupation in Latin America, which makes independent Latin American journalists a vulnerable group. Although there are considerable differences across countries in the region, including in the number and severity of registered incidents against press freedoms and freedom of expression, there are also important common characteristics and trends. State actors, or others with direct ties to economic and political power structures, are the primary perpetrators of attacks and threats against press freedoms and freedom of expression in Latin America. The rise of organized crime and drug trafficking as major threats against journalists and media outlets is also a shared reality in the region. High degrees of impunity are commonplace in cases of attacks against these freedoms, which in turn feeds a cycle of violence and intimidation against media outlets, journalists and citizens that eventually results in censorship and self-censorship. This cycle hinders access to information that is valuable for a society's sustainable development. State complicity and direct responsibility in attacks against press freedoms and freedom of expression throughout Latin America, along with rampant impunity, have a negative impact on the implementation of the 2030 Agenda, specifically on key human rights provisions in SDG 16.

Journalists in Latin America faced violence, lawsuits, and police harassment in 2018. Although the 2018 World Press Freedom Index from Reporters Without Borders shows a slight overall improvement in freedom of expression in the region, the patterns of extreme violence, impunity, and authoritarian policies towards journalists in several Latin American countries continue unabated. Attacks against the free press are still frequent, especially at political events and demonstrations. Journalists are still subjected to intimidation or abusive judicial proceedings, most of all when reporting on the special interests of politicians or elected officials.

Throughout 2018, 733 alerts were registered in the eight participating countries in Latin America under the twelve common regional indicators designed by **Voces del Sur**; 44 were also registered as gender alerts and a staggering 404 pertained to attacks on press freedoms and freedom of expression with the state as the perpetrator. Aggressions and attacks were the most recurring alerts at both the regional and country levels, followed by alerts related to abusive use of state power and access to information. With regards to some of the most heinous violations against press freedom and freedom of expression, six journalists were murdered, eight kidnapped and two tortured in Latin America in 2018. Nicaragua is the country with the most registered alerts overall by a large margin.

There were 44 gender alerts reported in the region during 2018. This does not mean that gender violence and misogyny are not problems. Gender violence in journalism may be rendered invisible by an industry-wide gender bias. This relatively low number of alerts may also reflect weaknesses on behalf of participating CSOs with regards to identifying and registering gender alerts.

LATIN AMERICA

ATTACKS AGAINST FREEDOM OF EXPRESSION
JANUARY - DECEMBER 2018



OVERVIEW



Events with indications of gender based discrimination



Incidents perpetrated by State officials

CASES BY INDICATORS

1. MURDER



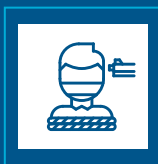
5

2. KIDNAPPING



8

3. FORCED DISAPPEARANCE



7

4. ARBITRARY DETENTION



48

5. TORTURE



2

6. AGRESSIONS & ATTACKS



306

7. STIGMATIZING DISCOURSE



43

8. ACCESS TO INFORMATION



84

9. JUDICIAL PROCEDURES AGAINST MEDIA & JOURNALISTS



33

10. ABUSE OF STATE POWER



112

11. JURIDICAL FRAMEWORK CONTRARY TO STANDARDS



11

12. INTERNET RESTRICTIONS



74

In Central America in particular, violence and impunity place journalists and media under a state of constant fear and self-censorship. In Honduras, investigative reporters, especially those covering organized crime and government-sponsored corruption, are systematically subjected to threats, intimidation, and physical violence, making it one of the world's most dangerous places for journalists.

In Nicaragua, the social crisis that erupted in massive anti-government protests proved lethal for journalist Angel Gahona, while two other reporters have been imprisoned and tortured under accusations of terrorism for exercising their journalistic work. In general terms, the independent journalists in Nicaragua have been systematically attacked, jeopardizing their lives, rights, property and equipment.

Central America's justice systems, often in complicity with organized crime and corrupt officials, fail to investigate and prosecute these attacks. Where specific mechanisms for protecting journalists exist, they have proven ineffective in dealing with the appalling security conditions of journalists. A similar situation takes place in Mexico, a country that in 2018 continued to rank as the deadliest nation (not in an armed conflict) for journalists worldwide. A chapter on Mexico is not included in this report since, for the time being, it is outside the scope of **Voces del Sur**.

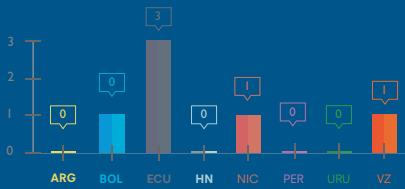
REGIONAL COMPARISON



- ARGENTINA
- BOLIVIA
- ECUADOR
- HONDURAS
- NICARAGUA
- PERU
- URUGUAY
- VENEZUELA



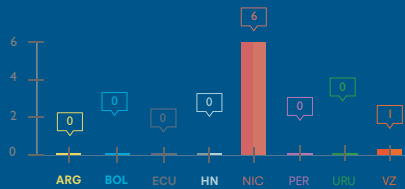
1. MURDERS : 5



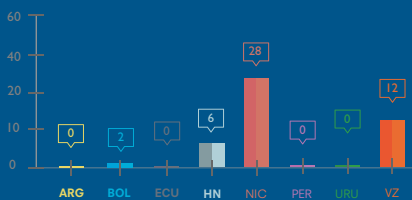
2. KIDNAPPINGS : 8



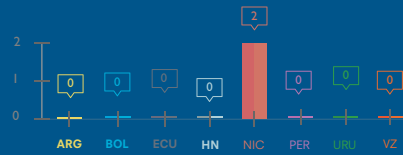
3. FORCED DISAPPEARANCES : 7



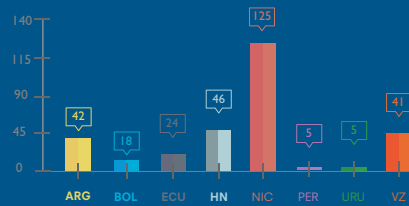
4. ARBITRARY DETENTIONS : 48



5. TORTURES : 2



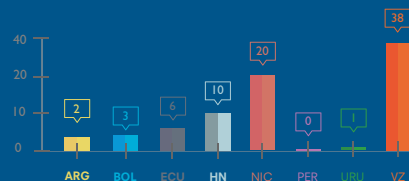
6. AGRESSIONS & ATTACKS : 297



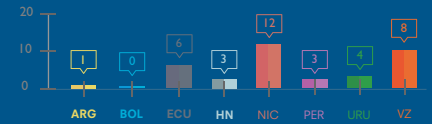
7. STIGMATIZING DISCOURSE : 47



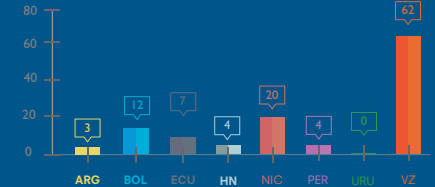
8. ACCESS TO INFORMATION : 80



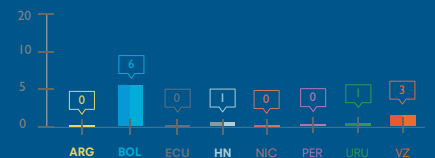
9. JUDICIAL PROCEDURES AGAINST MEDIA & JOURNALISTS : 37



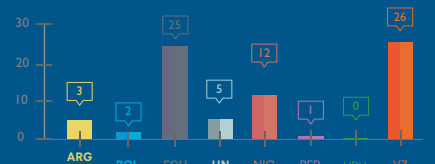
10. ABUSE OF STATE POWER : 112



11. JURIDICAL FRAMEWORK CONTRARY TO STANDARDS : 11



12. INTERNET RESTRICTIONS : 74





RESULTS
per Country



“
Argentina
”

• Context

The election of Mauricio Macri to the presidency has marked a lowering of tensions between the State and the Media in Argentina. This improved environment has enabled investigative reporters to denounce and investigate alleged corruption schemes that were prevalent during the former administration. The journalistic investigations known as the “Bribery Notebooks” were published in August 2018 and opened one of the most important corruption cases in Argentina’s history.

These investigations reveal in detail the trail through which bags full of money allegedly related to millions in bribes from contractors to Kirchner governments circulated. This case demonstrated that journalists are relatively free to exercise their work, even when they expose abuses by the highest circles of power - at least in Buenos Aires. Journalists and media who carry out this kind of investigation face challenges, yet they enjoy widespread recognition and social support in the capital.

The situation is different in the Argentinian provinces. There, journalists face constant physical attacks, violent threats that seek to intimidate, and abuse of power by local authorities and organized crime.

• Alerts

During 2018, 51 alerts of direct attacks against press freedom and freedom of expression were registered in Argentina; 82% relate to aggressions and attacks, 4% to access to information, 7% to abusive use of state power and 7% to internet restrictions. In 10 of the 49 alerts the state is identified as the perpetrator. The registered alerts do not necessarily reflect systemic persecution of the press in Argentina, but they do reveal a trend that poses a threat to press freedoms and freedom of expression in the country: so-called strongman politics.

This style of authoritarian leadership is especially present in the provinces and the country’s interior; 34 alerts were registered in the provinces, 17 in Buenos Aires. Non-state actors, particularly organized crime and drug traffickers, represent a threat in the provinces. Journalists and media workers in Paraná receive public death threats from accused drug traffickers, whereas the city of Rosario is a drug trafficking hub under a permanent war between cartels. Few cases of attacks against press freedoms and freedom of expression are registered annually in these areas. Journalists and outlets are threatened and pressured to refrain from registering any such attacks.

ARGENTINA

ATTACKS AGAINST FREEDOM OF EXPRESSION
JANUARY - DECEMBER 2018



OVERVIEW



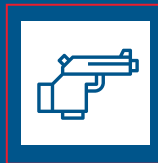
Events with indications of gender based discrimination



Incidents perpetrated by State officials

CASES BY INDICATORS

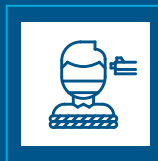
1. MURDER



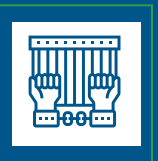
2. KIDNAPPING



3. FORCED DISAPPEARANCE



4. ARBITRARY DETENTION



5. TORTURE



6. AGRESSIONS & ATTACKS



7. STIGMATIZING DISCOURSE



8. ACCESS TO INFORMATION



9. JUDICIAL PROCEDURES AGAINST MEDIA & JOURNALISTS



10. ABUSE OF STATE POWER



11. JURIDICAL FRAMEWORK CONTRARY TO STANDARDS



12. INTERNET RESTRICTIONS





IN FOCUS: The Sustainability of The Media

In general, the state is the primary aggressor against press freedoms and freedom of expression in Argentina. This also manifests itself in financial terms. The loss of media jobs is perhaps the biggest threat to journalism in the country. This phenomenon has intensified over the last 5-6 years. During the Kirchner years new media outlets emerged that were funded through state advertisement. The state's abusive practice of allocating its advertising budget without transparency to serve its own interests has had a negative impact on the quality and quantity of voices in the media, as outlets are financially asphyxiated and forced to shut down. FOPEA's Labor Observatory estimates that only between 2017 and 2018 1,634 jobs were lost in journalism adding to a total of 3,000 lost jobs since 2015 and an equal or even greater amount are at risk today.

• Recommendations

As the most critical and violent threats against press freedoms and freedom of expression in Argentina are present in the provinces, efforts and resources ought to be focused there. CSOs and media outlets must work together in order to develop the capacities, knowledge and tools to face attacks from non-state actors. Efforts to enhance audience engagement and loyalty are of paramount importance. Strong communities and relationships between journalists, outlets and readers can help mitigate the abuses of strongman politicians. Furthermore, this kind of social capital can serve as the foundation for innovative business models for sustainable independent journalism, such as memberships. The independent media ecosystem must be analyzed and strengthened from an entrepreneurial perspective in order to boost existing models and stimulate the emergence of new ones.



Bolivia



• Context

Persecution of the press is institutionalized in Bolivia. Its main pillars include financial asphyxiation of independent media outlets through abusive practices in the allocation of state advertisement; the approval of norms that restrict press freedoms and freedom of expression and facilitate censorship; and an official discourse that stigmatizes journalists and outlets. Insults, reputational attacks and threats constitute a sinister call to action for pro-government sectors to physically and verbally assault, as well as rob, reporters assigned to cover social conflicts or other sensitive issues. Journalists in Bolivia are exposed to threats and verbal attacks from a number of actors ranging from the president to the police, also including ministers, mid-level officials and mayors. Since 2016 the government, its officials, and allies have orchestrated a campaign to undermine investigative journalism by labeling independent journalists and media outlets as the “cartel of lies”. The polarization caused by this stigmatizing discourse is promoted at the highest levels of government and translates to threats and attacks, both physical and verbal, against journalists and their close ones. State agents and members of the ruling party perpetrate most of these.

• Alerts

There were 65 registered alerts in Bolivia in 2018. Some 70% of the them point towards the state, including the police, judges, ministers and even the president as the main perpetrator. Stigmatizing discourse accounts for 32% of registered alerts in the country and the state is identified as the perpetrator in 86% of all cases of stigmatizing discourse. This reveals a pattern of confrontation between the state and the media that has been prevalent during the successive governments of Evo Morales.

There were also 18 cases of attacks and aggressions, which represent 28% of all alerts. State forces are again the most common perpetrator. This corroborates the systematic pattern of state promoted violence against the press in Bolivia. Furthermore 57% of all state sanctioned attacks and aggressions were directed towards women, which might also reveal a worrying pattern of misogyny.

The third most common incident in Bolivia in 2018 was the abusive use of the state apparatus, accounting for 18% of all alerts. Bolivia ranks at the top of the countries in this report on the number of proposed and/or approved legislation that limits press freedoms and freedom of expression; yet another example of the state’s systematic efforts to silence independent media in the country.

BOLIVIA

ATTACKS AGAINST FREEDOM OF EXPRESSION
JANUARY - DECEMBER 2018



OVERVIEW



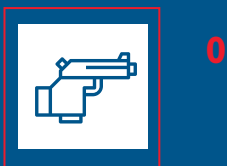
Events with indications of gender based discrimination



Incidents perpetrated by State officials

CASES BY INDICATORS

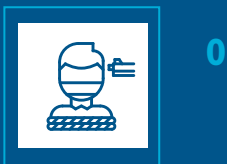
1. MURDER



2. KIDNAPPING



3. FORCED DISAPPEARANCE



4. ARBITRARY DETENTION



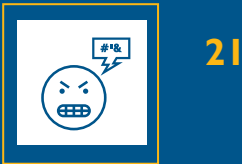
5. TORTURE



6. AGRESSIONS & ATTACKS



7. STIGMATIZING DISCOURSE



8. ACCESS TO INFORMATION



9. JUDICIAL PROCEDURES AGAINST MEDIA & JOURNALISTS



10. ABUSE OF STATE POWER

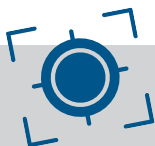


11. JURIDICAL FRAMEWORK CONTRARY TO STANDARDS



12. INTERNET RESTRICTIONS





IN FOCUS: Profitable Propaganda and Financial Asphyxiation

Under president Evo Morales, state owned media outlets have become an extraordinary propaganda apparatus. The government's rhetoric is broadcast and promoted all over the country through a network of more than 200 radio stations in urban and rural areas. Radio Patria Nueva coordinates this massive network. The strength of state-run television rests on the Tupak Katari communications satellite, which transmits Bolivia TV's signal throughout the entire country and even to other continents. The satellite also broadcasts the signal of private television channels that belong to government allies and are rewarded with state advertisement. Independent media outlets that criticize the government are excluded from state advertisement and satellite broadcasting. Furthermore, the Bolivian government has drafted and approved 13 laws and decrees to force newspapers, radio and television stations to advertise state campaigns for free. These measures, added to the aforementioned propaganda apparatus through state and allied media outlets, constitute a powerful mechanism to muster political support for the president.

• Recommendations

In Bolivia, press freedoms and freedom of expression have been weakened over the last years. CSOs and media outlets must collaborate to mitigate and counter the stigmatizing discourse that seeks to erode the social capital between journalism and its audience. The Bolivian independent media ecosystem must seek economic, political and social sustainability. Loyalty and trust between journalists, outlets and citizens can play a key role. As for Bolivia's worrying juridical framework, advocacy efforts ought to be directed towards the creation of some kind of task force to better understand and face this challenge. This should be carried out within the framework of the Inter American Human Rights System. It is recommended for the Government to implement a comprehensive strategy to promote and defend press freedoms and freedom of expression.



Ecuador



• Context

Ecuador is currently transitioning from a government known for its hostility towards the free press to a government that is open to dialogue and willing to deescalate confrontation. The new government has adopted strategies and measures to consolidate this process. Abuse of state power and aggressions against journalists were rampant under the previous government of Rafael Correa. These have given way to a considerable decrease in animosity against the press and the implementation of meaningful reforms, such as the removal of the Communications Superintendent, the reform of the Communications Law, and the elimination of the Superintendence of Information and Communication. This controversial institution abusively sanctioned and fined journalists and media outlets. Sanctions and fines have practically disappeared. Lenin Moreno's government has generally attempted to recognize and respect the role of the media in holding the public sector accountable.

Nevertheless, there still exist considerable threats and risks against press freedoms and freedom of expression in Ecuador. State actors are still carrying out the majority of attacks against the press in the country, through administrative, judicial and legislative measures. These attacks are no longer originating from the central government, but from local authorities and officials instead. Examples include public authorities and officials pushing forth processes to criminalize and prosecute those who criticize them on social media leading up to fines and imprisonment; aggressions against reporters and camera operators covering political party mobilizations; and cases of online censorship.

• Alerts

In 2018 a total of 83 alerts were registered for violations against press freedoms and freedom of expression in Ecuador. 30% of those cases were related to Internet restrictions including closure and arbitrary suspension of social network accounts, hackings, cyber threats and blocking of web sites. Most of these violations were perpetrated either by unknown sources or by international private businesses. This might reveal a fundamental weakness in Ecuadorian online journalism: cyber security. Aggressions and attacks accounted for 28% of registered alerts.

The state, mostly through local authorities and mid-level officials, was identified as the perpetrator in 25% of these violations. This is also the case in violations related to abusive use of state power; most violations come from mid-level political authorities. Low levels of respect and tolerance shape a worrying trend among local and mid-level authorities in Ecuador.

ECUADOR

ATTACKS AGAINST FREEDOM OF EXPRESSION
JANUARY - DECEMBER 2018



OVERVIEW



Events with indications of gender based discrimination



Incidents perpetrated by State officials

CASES BY INDICATORS

1. MURDER



3

2. KIDNAPPING



3

3. FORCED DISAPPEARANCE



0

4. ARBITRARY DETENTION



0

5. TORTURE



0

6. AGRESSIONS & ATTACKS



24

7. STIGMATIZING DISCOURSE



9

8. ACCESS TO INFORMATION



6

9. JUDICIAL PROCEDURES AGAINST MEDIA & JOURNALISTS



6

10. ABUSE OF STATE POWER



7

11. JURIDICAL FRAMEWORK CONTRARY TO STANDARDS

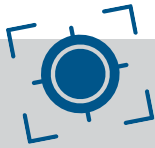


0

12. INTERNET RESTRICTIONS



25



IN FOCUS: The Non-State Threat

Non-state actors pose a great risk to journalism in Ecuador. On March 26, 2018 Javier Ortega, a reporter, Paúl Rivas, a photographer, and Efraín Segarra, a news anchor, were kidnapped and murdered while on a journalistic mission to Mataje in the Esmeraldas province located near the Colombian border. These journalists, who were working for Ecuadorian newspaper El Comercio, fell victim to dissident armed groups from the Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). This regrettable incident has rendered safety, including digital security, physical integrity and psychological wellbeing, amongst the main worries for journalism in Ecuador. Organized crime and other non-state actors are definitely a cause for concern.

• Recommendations

There is a clear need for a system through which the state can promote a far-reaching society-wide recognition of the role of journalism, as well as implement holistic safeguards for journalists. In that respect the creation of the Committee for the Protection of Journalists, a civil society initiative, is recognized as an important step, but it must be taken further. Special measures should be designed and implemented to mitigate risks generated by non-state actors. Additionally, efforts should be made to consolidate the positive changes related to the transition from the Correa government to the Moreno government. These measures ought to include strategies to turn local authorities and mid-level officials from detractors to allies of independent journalism.



Honduras



• Context

Honduras faces major problems regarding press freedoms and freedom of expression. All of them have worsened since the re-election of Juan Orlando Hernandez for his second term as President. State sponsored aggression against journalists, their property and equipment is rampant and remains in impunity.

Persecution, harassment, surveillance, censorship and self-censorship create a vicious cycle that stifles quality independent journalism. Institutionalized hostility from the country's economic and political power structures towards the right to protest and the right for journalists to cover protests makes covering the erosion of civic space a high-risk endeavor. This factor has worsened after December 2017 when Juan Orlando Hernández imposed his power over protests caused by generalized malaise regarding and rejection of seemingly fraudulent election results. More than 30 people were murdered, a figure confirmed by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

At least five people have also been imprisoned as a form of political retaliation and media outlets that differ from the official line have been attacked. This limitation and reduction of civic space for open and public debate is a severe threat to democracy and human rights in Honduras.

• Alerts

Throughout 2018, 57.5% of registered alerts in Honduras were related to aggressions and attacks against journalists. Most of these occurred in the context of journalistic coverage of protests by Honduran citizens. Many of these attacks included the destruction or confiscation of journalistic equipment. Threats of aggressions and attacks were also very common, leading to the forced displacement of at least one journalist. Violations related to access to information account for 12.6% of registered alerts. These violations against press freedoms and freedom of expression aim to restrict the ability of journalists to inform the population about the state's bloody repression of protests. Of the 80 registered alerts of in Honduras in 2018, 69% identify the state as the perpetrator.

HONDURAS

ATTACKS AGAINST FREEDOM OF EXPRESSION
JANUARY - DECEMBER 2018



OVERVIEW



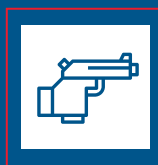
Events with indications of gender based discrimination



Incidents perpetrated by State officials

CASES BY INDICATORS

1. MURDER



2. KIDNAPPING



3. FORCED DISAPPEARANCE



4. ARBITRARY DETENTION



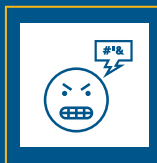
5. TORTURE



6. AGRESSIONS & ATTACKS



7. STIGMATIZING DISCOURSE



8. ACCESS TO INFORMATION



9. JUDICIAL PROCEDURES AGAINST MEDIA & JOURNALISTS



10. ABUSE OF STATE POWER



11. JURIDICAL FRAMEWORK CONTRARY TO STANDARDS



12. INTERNET RESTRICTIONS





IN FOCUS: Secrecy as a Policy of State

Honduras has become a country of secrets. The approved Law of Official Secrets and Declassification of Public Information exempts more than 20 public institutions from providing access to information regarding their actions on matters of public interest. This is an effective tool for the government to hide information on issues such as security and defense, budgets and public purchases. It places these institutions beyond the reach of the law for access to public information. It seems that the Institute for Access to Public Information will declare information related to natural resource issues, such as social and environmental impact studies for projects, confidential. This is concerning given the prominence of extractive economic activities such as mining; it may well result in abuses against territorial, indigenous, and environmental rights, as well as the criminalization of resistance against these projects.

• Recommendations

It is imperative to ensure that civil and penal legislation in Honduras meets the standards espoused by the Inter-American Commission on Human Rights, including protection for journalists from arbitrary and malicious judicial processes. Inter-American benchmarks on press freedoms and freedom of expression provide a clear roadmap. Libel and defamation crimes must be processed primarily through civil channels. The current legal system is a weapon against press freedoms and freedom of expression and must be reformed. Furthermore, existing mechanisms for the protection of journalists and human rights defenders such as special prosecutors for human rights must be diligent and willing to face powerful actors. The judiciary must guarantee access to justice, as impunity is a major problem. The international community, including regional and global human rights organisms, must accompany this process in a role of watchdog to combat impunity.



Nicaragua



• Context

Press freedoms and freedom of expression have gradually deteriorated in Nicaragua in 11 years since Daniel Ortega took office. Journalism has become a high-risk occupation. Censorship, most notably in the form of a strictly enforced prohibition against independent journalists covering public institutions and government activities, has given way to military intervention of newsrooms, criminalization and imprisonment as the government's preferred attack against the free press.

More than 73 journalists fled the country between April and December 2018 to protect their lives and freedoms. Many continue their journalistic work from abroad. Nevertheless, their families who remain behind are also targeted.

The state is the most frequent perpetrator in attacks against press freedoms and freedom of expression, especially after the onset of massive national protests in April 2018. Sympathizers of the ruling FSLN party and paramilitary groups that answer to the Ortega government also account for a considerable share of violations. The state regulator is responsible for systematic attacks against the free press, including administrative and judicial harassment.

Nicaragua has had a law for access to public information for 12 years. Yet it has never been enforced. The regime's official policy is secrecy and a tight control to ensure that only its own journalists have access to conveniently self-serving information. Between January and March of 2018, before the ongoing democratic and human rights crisis started, 87% of all violations against press freedoms and freedom of expression fell under the access to information category.

• Alerts

During 2018, 234 alerts pertaining to violations against press freedoms and freedom of expression were registered in Nicaragua. Of these, 53% are cases of aggression and attacks, 12% arbitrary detentions, 10% restrictions on access to information or direct obstruction of journalistic work, and 9% abusive use of state power. One journalist, Angel Gahona, was murdered, and there are also six cases of forced disappearances, eight judicial procedures, six forced disappearances and two cases of torture. The state is the most frequent perpetrator of attacks against press freedom and freedom of expression, accounting for 57% of total registered alerts. Sympathizers of the ruling FSLN party and paramilitary groups that answer to the Ortega government also account for a considerable share of violations. However, these attacks have not been treated as violations perpetrated by the state.

NICARAGUA

ATTACKS AGAINST FREEDOM OF EXPRESSION
JANUARY - DECEMBER 2018



OVERVIEW



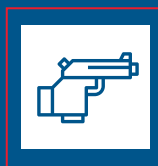
Events with indications of gender based discrimination



Incidents perpetrated by State officials

CASES BY INDICATORS

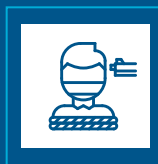
1. MURDER



2. KIDNAPPING



3. FORCED DISAPPEARANCE



4. ARBITRARY DETENTION



5. TORTURE



6. AGRESSIONS & ATTACKS



7. STIGMATIZING DISCOURSE



8. ACCESS TO INFORMATION



9. JUDICIAL PROCEDURES AGAINST MEDIA & JOURNALISTS



10. ABUSE OF STATE POWER



11. JURIDICAL FRAMEWORK CONTRARY TO STANDARDS



12. INTERNET RESTRICTIONS





IN FOCUS: Terror and Resistance

Attacks against press freedoms and freedom of expression in Nicaragua have grown most severe in the context of the civic rebellion that broke out in April 2018. In ten months, journalists have been murdered, assaulted, criminalized, harassed, subjected to hate speech, unlawful detention, robbery and destruction of equipment. Ángel Gahona was murdered on April 21, 2018 live on air while covering the ongoing social uprising against the Ortega government.

Journalists Lucía Pineda Ubau and Miguel Mora are political prisoners; they have been irregularly charged and tried for alleged conspiracy to commit terrorist acts. Their outlet, 100% Noticias, was invaded by the police and de facto confiscated. The same is true of Confidencial's newsroom and TV set, which remain occupied by the police. Its director, Carlos Fernando Chamorro, is one of dozens of Nicaraguan journalists forced into exile. Independent journalism is under fire from an extremely violent and oppressive regime in Nicaragua.

The state violates its mandate to guarantee the rights of journalists by becoming instead the main culprit of attacks against press freedoms and freedom of expression. Yet, the quality and resilience of Nicaraguan journalists and outlets has created an unprecedented surge in popular support and readership. Nicaraguan independent journalism has become a national and regional symbol of resistance in the face of state terror.

• Recommendations

It is important to understand that the Nicaraguan crisis is still ongoing. Press freedoms and freedom of expression in the country are still under a state of emergency. Maximum pressure is needed at both the national and international level to fully restore fundamental freedoms in Nicaragua. The country's journalists need support both in Nicaragua and abroad, as those who remain are extremely vulnerable and those who have been forced into exile often lack the resources to carry on with their work. Class action strategic litigation should be undertaken in the framework of the Inter American Human Rights System for the violations perpetrated by the Ortega Murillo Regime against journalists and media outlets in Nicaragua.



Perú



• Context

The abuse of state power is the main threat against press freedoms and freedom of expression in Peru. Journalists and media outlets face reprisals in the form of accusations and legal procedures on the grounds of alleged crimes related to defamation and libel. Such is the case against Pedro Salinas and Paola Ugaz, independent journalists who denounced abuses committed within Sodalicio Vida Cristiana, a religious organization. The trial against them constitutes retaliation for their role in carrying out and publishing journalistic investigations that compromise officials and a sector of the Catholic Church for their links to acts of corruption. The justice system has also been used to threaten press freedoms and freedom of expression in other ways. On July 12, 2018 the journalistic directors of IDL-Reporteros, a collective of investigative journalism, and Panorama, a program on Panamericana Televisión, were subpoenaed by the Attorney General of Internal Control to reveal the source of audios published by both outlets that reveal acts of judicial corruption. These measures constitute an act of intimidation violating the right to the confidentiality of sources, which is constitutionally guaranteed and essential for journalistic work.

Attempts to control the press and violate freedom of expression show different characteristics at the local level. Media outlets beyond the country's most important urban centers depend highly on state advertisement. The allocation of state advertisement is used as the primary tool to coerce outlets in this context. Journalists and outlets that question power and seek to hold accountable those who wield it are blacklisted. On the other hand, faithful propagandists and media that choose to look the other way are rewarded. Journalism is a vulnerable occupation in Peru, with problems that include low wages, high informality, and a generalized disregard for the labor rights of journalists. This vulnerability, coupled with the abusive allocation of state advertisement budgets, leads to many journalists and outlets compromising their editorial line for fear of losing access to scarce revenue. The "Mulder Law" (N° 30793) clearly attempts to undermine independent journalism by prohibiting state advertisement in non-state media outlets. The Constitutional Tribunal declared the law unconstitutional.

• Alerts

A total of 13 alerts were registered in Peru for violations against press freedoms and freedom of expression in 2018. Aggressions and attacks account for 38% of these alerts. Politics and organized crime are aggravating factors related to these kinds of violations. Two of the alerts are related to the Fuerza Popular party. Party members and supporters physically attacked and destroyed the equipment of a photographer who was covering a manifestation in support of Keiko Fujimori, who is currently held in the women prison in Lima under money laundering charges. Non-state actors such as organized crime and drug traffickers are signaled in relation to three alerts registered in the period. The abusive use of state power accounts for 31% of registered alerts in Peru in 2018. Two of them are related to judicial orders demanding that journalistic sources are revealed, in clear violation of international standards for the protection of sources. Two

alerts are related to political groups in the national Congress attempting to introduce measures to censor content. Finally, 23% of alerts relate to judicial procedures against journalists. These legal processes are also being used in Peru to try to censor the press specially when covering sensitive issues like the above-mentioned cases against the Catholic Church and corrupt government officials.



IN FOCUS: The Threat of Organized Crime in the Provinces

Threats and censorship are also present in areas of the country with rampant social conflict related to extractive economic activities, drug trafficking and illegal mining. Attacks of this nature are especially frequent in the country's interior, in the framework of regional and local situations where organized crime is the ruling power. Two crucial alerts were registered in the southeastern region Madre de Dios. On January 6, 2018, in the early morning, Juan Berríos Jiménez's car was set on fire just outside his house. The journalist publicly pointed his finger at the mayor of Iberia, Julián Toledo Huamán, denouncing that he was trying to scare him into refraining from publishing alleged acts of corruption. Manuel Calloquispe, correspondent for Latina and El Comercio in the same region, is facing threats from a criminal organization. He covered a preventive prison hearing involving members from the group. These cases aggravate the context of violence in the interior of the country, which is best exemplified by the tragic murder of journalist Hernán David Choquepata Ordóñez in Camaná, Arequipa, in the country's south, towards the end of 2016. He was shot to death in his radio booth while transmitting his program. This crime remains unpunished to this day.

• Recommendations

Greater efforts to identify and systematize the abuse of state power to undermine press freedoms and freedom of expression must be undertaken. These efforts ought to be developed in the framework of the Inter American Human Rights System in order to generate national and international pressure to curb these abuses. Furthermore, CSOs and media outlets must work together in order to better comprehend and mitigate the risks associated with non-state actors, especially outside of the primary urban centers. Finally, it is important to strengthen the capacities and knowledge of Peru's independent media ecosystems regarding entrepreneurship and resilience, in order to limit the negative impact of economically unfavorable conditions such as the abusive allocation of state advertisement.

PERÚ

ATTACKS AGAINST FREEDOM OF EXPRESSION
JANUARY - DECEMBER 2018



OVERVIEW



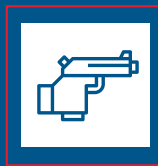
Events with indications of gender based discrimination



Incidents perpetrated by State officials

CASES BY INDICATORS

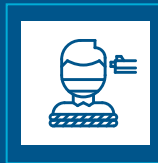
1. MURDER



2. KIDNAPPING



3. FORCED DISAPPEARANCE



4. ARBITRARY DETENTION



5. TORTURE



6. AGRESSIONS & ATTACKS



7. STIGMATIZING DISCOURSE



8. ACCESS TO INFORMATION



9. JUDICIAL PROCEDURES AGAINST MEDIA & JOURNALISTS



10. ABUSE OF STATE POWER



11. JURIDICAL FRAMEWORK CONTRARY TO STANDARDS



12. INTERNET RESTRICTIONS





“
Uruguay
”

• Context

In spite of a generally favorable environment for press freedoms and freedom of expression, alerts were registered in Uruguay in 2018 pertaining to incidents that—according to international and regional standards—constitute violations, and threaten journalists and their work.

Although no major or severe alerts were registered in the period reviewed for this report, it is important to note that the attack against journalist Isabel Prieto, from *Caras y Caretas* magazine, remains in impunity since 2017 as the case has not been solved and the perpetrators have not faced justice.

The sustainability of independent media outlets is one of the most important threats to press freedoms and freedom of expression in Uruguay. Independent media outlets in the country are facing a financial and a business model crisis that has led to many journalists losing their jobs. Drastic reductions in advertising budgets over the last few years have had a negative impact on the sustainability of the entire media ecosystem.

• Alerts

Throughout 2018, 12 alerts against press freedoms and freedom of expression were registered in Uruguay. Aggressions and attacks make up 41.6% of the alerts; non-state actors committed all of these. Meanwhile 33.3% of alerts were linked to judicial procedures against media outlets and journalists; the state perpetrated most of these. The State is also identified as the perpetrator for one alert related to stigmatizing discourse, and one alert related to access to information.

These cases show that even if the State is not responsible for aggressions and attacks against journalists, political operators still see the state apparatus as a tool to be used against reporters who are deemed as adversaries. Furthermore, there is one alert for juridical framework contrary to standards.

On April 24, 2018 the executive branch of government inserted a worrying article to a decree that regulated the Law on Hydro-biological Resources, negatively affecting access to information and establishing a mechanism to censor scientific and academic work.

URUGUAY

ATTACKS AGAINST FREEDOM OF EXPRESSION
APRIL 2017 - MARCH 2018



OVERVIEW



Events with indications of gender based discrimination



Incidents perpetrated by State officials

CASES BY INDICATORS

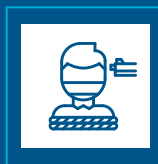
1. MURDER



2. KIDNAPPING



3. FORCED DISAPPEARANCE



4. ARBITRARY DETENTION



5. TORTURE



6. AGRESSIONS & ATTACKS



7. STIGMATIZING DISCOURSE



8. ACCESS TO INFORMATION



9. JUDICIAL PROCEDURES AGAINST MEDIA & JOURNALISTS



10. ABUSE OF STATE POWER

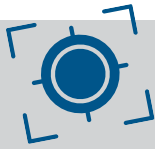


11. JURIDICAL FRAMEWORK CONTRARY TO STANDARDS



12. INTERNET RESTRICTIONS





IN FOCUS: Progress on Access to Information

The year 2018 marked the tenth anniversary of the approval of the Law of Access to Public Information in Uruguay. This is a milestone worth celebrating because it has effectively contributed to greater transparency around matters of state and public interest. Nevertheless, ensuring the proper enforcement of the law is a constant battle. Many sectors within the state fail to comply with their obligations regarding access to public information and there is no binding enforcement mechanism to guarantee compliance. Regarding active transparency, there is also progress in public institutions' compliance in terms of publishing information on their websites. Yet there is much to improve, as on average the public institutions that were reviewed only complied with 56% of their obligations related to active transparency.

• Recommendations

Uruguay's strong enabling environment for press freedoms and freedom of expression must not lead to complacency. The attacks against journalist Isabel Prieto from *Caras y Caretas* magazine must be brought to justice. Journalists must be well trained on press freedoms and freedom of expression standards and mechanisms, national laws, and international treaties, and on ethical self-regulation of journalistic standards, including digital journalism and social media. Existing mechanisms must be improved and new ones created to ensure fast, effective, and secure ways to register threats against journalists, especially those in remote areas far from the main urban centers. The state must improve active transparency and compliance with national laws and international treaties adopted by the country. Civil society ought to monitor this compliance. The state must also guarantee access to information and facilitate the work of journalists, especially in key contexts such as elections and matters of public interest. Transparent processes and oversight must be in place to prevent abuses in cases in which state institutions seek exemptions to avoid publishing information. Citizens must be empowered on their right to access public information, as this matter is so far considered pertinent namely for journalists and civil society organizations. Independent media outlets need to garner greater support by filling the voids created by the weakening of traditional media outlets. It is of crucial importance for the law to regulate the production, planning, and allocation of state advertisement to be approved before the end of the current legislative cycle to consolidate this new step forward in Uruguayan democracy regarding a strong free press and transparency in the use of public resources.



Venezuela

• Context

Venezuela's situation regarding press freedoms and freedom of expression is critical. The most frequent attacks against the free press and independent journalism are related to abuse of power, especially from the state. Censorship has severely undermined traditional and digital journalists and media outlets. In the digital realm Armando.info, El Pitazo, El Nacional, Cactus24 and La Patilla were blocked in 2018. Private and state Internet service providers have arbitrarily blocked these sites violating due process, which demands a warrant and an official justification of these measures. These blockages are implemented through DNS and HTTP censorship, intermittently blocking connection ports in the Internet services provided by CANTV, Movistar, Movilnet and Digitel. Journalists face travel restrictions or other measures from government authorities that violate their freedom of movement. Targeted judicial proceedings have turned the courts into instruments of harassment against journalists, editors, and outlets; Tal Cual, El Nacional, La Patilla, Correo del Caroní, and Armando.info all face libel charges.

Impediments for access to information are another major threat. Official indicators and statistics are not made public with the required quality or regularity; this means a blackout of even key basic information necessary to assess the country's economic situation such as inflation and GDP. The government has failed to publish the National Budget Law for three years, turning it into a de facto state secret. The country's National Institute of Statistics has not conducted the people and housing census since 2011, creating an enormous gap in demographic data. Other key social welfare indicators such as maternal and child mortality rates, or information regarding health epidemics, have also been kept in the dark since 2012. The government's policy is based on a complete lack of transparency and access to information regarding matters of public interest.

Restrictions on press freedoms and freedom of expression in Venezuela are intrinsically tied to crippling institutional weakness and a failure of the rule of law. Economic, legal, and political guarantees are weak or nonexistent. Misinformation and propaganda have long kidnapped the public agenda at a national level. Over the last 10 years the state has abused public resources for politically favorable communications campaigns. The forced sale of media outlets and drastic changes in editorial lines, censorship and self-censorship, have flagellated Venezuelan journalists and outlets as a result of a deliberate government plan of attack against press freedoms and freedom of expression.

• Alerts

In 2018, 196 alerts were registered in Venezuela. The most heinous include the murder of camera operator Manuel Pareo, one case of kidnapping, and one case of forced disappearance among the most severe alerts. The independent media is facing one of its darkest moments in the country's history. State orchestrated shortages of paper, ink and other inputs threaten its very survival. Abusive use of state power accounts for 31.6% of registered alerts, as the Maduro regime and its operators have attempted to silence journalists. Aggressions and attacks account for 20.9% of alerts, whereas

19.3% were related to access to information; the state is identified as the perpetrator for a majority of these cases. In this period, 13.2% of all alerts were linked to Internet restrictions. There were twelve alerts related to the arbitrary detention of national and international journalists. Political operators also used the judicial system to intimidate journalists with eight registered cases of judicial procedures against media outlets and journalists. Worryingly, the state is listed as the perpetrator in 62% of all registered alerts in Venezuela. This does not take into account violations committed by supporters of the Maduro regime that often act on behalf or with the acquiescence of the State.



IN FOCUS: The Crisis in Print Media

Print media has faced a particularly severe crisis in 2018: 35 outlets have ceased to circulate due to limitations on buying and importing paper or other inputs. A worrying 22 of these suspensions have proven definitive, whereas only six were temporary out of print and are now on circulation. An additional 16 newspapers have been forced to implement intermittent interruptions in their circulation, with 14 more that have gone from daily to weekly circulation or other cutbacks in publication frequency. These measures are meant to stretch paper reserves and reduce production costs. Before the crisis started, there were 90 print media outlets in 20 regions in the country. Today there are only 30, a reduction of 68%. In four regions, Apure, Sucre, Portuguesa and Barinas, print media is not available at all anymore. In another ten regions only one print media outlet remains, and most of the time it is a pro-government newspaper that has been able to survive due to cronyism in the allocation of state advertisement.

• Recommendations

Violations against press freedoms and freedom of expression in Venezuela are related to the country's deep social, economic and political crisis. In the context of Venezuela's tense environment, state censorship and repression may worsen. Continuing to monitor violations of press freedoms and freedom of expression is therefore essential. The Venezuelan state ought to guarantee the security conditions to allow journalists and media to exercise their work free from physical and psychological violence; this includes preventing and investigating cases where press freedoms and freedom of expression are at risk. To the contrary, the state is identified as the main perpetrator of attacks against press freedoms and freedom of expression. The approval of the Anti-Hate law by the

National Constituent Assembly further encourages authorities to exercise censorship whenever an investigation or report is deemed to incite hate. The law includes prison sentences, ranging from 10 to 20 years, for journalists and media who do not comply with censorship requests by authorities. Article 27 of the Law on Social Responsibility in Radio, Television and Electronic Media sets conditions for the regulation and prohibition of content. Both norms further hinder press freedoms and freedom of expression in an already precarious context and should be re-written according to international standards. Public policies around Internet access have been limited by regulatory processes affecting market competitiveness and incentives for investment. This has had a negative impact on technological advancements in the telecommunications sector. Policies related to Internet access should be guided by the principles of inclusion, diversity, openness, competitiveness and freedom.

VENEZUELA

ATTACKS AGAINST FREEDOM OF EXPRESSION
OCTOBER - DECEMBER 2018



OVERVIEW



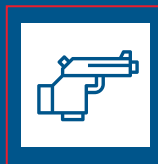
Events with indications of gender based discrimination



Incidents perpetrated by State officials

CASES BY INDICATORS

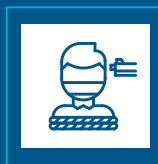
1. MURDER



2. KIDNAPPING



3. FORCED DISAPPEARANCE



4. ARBITRARY DETENTION



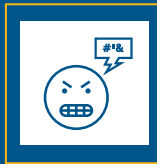
5. TORTURE



6. AGRESSIONS & ATTACKS



7. STIGMATIZING DISCOURSE



8. ACCESS TO INFORMATION



9. JUDICIAL PROCEDURES AGAINST MEDIA & JOURNALISTS



10. ABUSE OF STATE POWER



11. JURIDICAL FRAMEWORK CONTRARY TO STANDARDS



12. INTERNET RESTRICTIONS



● REGIONAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Latin America's progress towards SDG 16 and target 16.10 has been limited. Freedom of Expression has improved slightly, according to Reporters Without Borders' latest report. Yet several Latin American societies continue to face severe problems related to press freedoms and freedom of expression: authoritarian state policies to attack the press, limited revenue and funding for independent media outlets, extreme violence against journalists, and rampant impunity. To accelerate progress towards SDG 16 and target 16.10 in Latin America, diverse stakeholders in the region's media ecosystems must collaborate to improve the capacity to measure the state and impact of independent journalism, as well as to build an environment that enables the economic, political, and social sustainability of a free press.

Challenges and limitations pertaining to the way SDG 16 is monitored are signaled throughout this report. Cases beyond the most severe, such as murder or imprisonment, are difficult to categorize and document in a standardized way. Important obstacles such as financial barriers and externalities such as a weak rule of law have a large impact yet are not taken into account. Harassment is often used as a blanket term. It is difficult to monitor the effectiveness of access to information laws in a methodologically consistent way that can facilitate comparisons across countries. Follow-up and analysis of registered attacks against press freedoms and freedom of expression is weak.

• Recommendations for Journalists and Civil Society

- 1. Measurement:** Broad coalitions with diverse actors that bring specific tools, perspectives, and competencies ought to be built in order to monitor and follow up on each of the many conditions that must be met to fulfill SDG 16. Indicators at the base must be detailed and rigorous, distinguishing clearly between different types of harassment, taking into account phenomena such as judicial persecution and financial asphyxiation. These indicators must feed complex and methodologically robust coefficients in order to favor regional and global comparisons and analyses.
- 2. Entrepreneurship:** A similar process should be undertaken to measure the economic, political, and social returns of independent journalism. The Latin American media sector is ripe for a focus on social entrepreneurship whereby outlets can thrive through a mix of development cooperation, impact investment and sustainable

revenue streams such as advertising, crowdfunding, membership models, and new innovative business units. Learning to measure the nonfinancial returns on investment in quality journalism would be a huge boost for the ecosystem. The economic, political, and social viability of independent media ecosystems and SDG 16 go hand in hand. At the economic level symbiotic business and journalistic models must be developed; as for any other industry the rules must be fair, clear and favor innovation. For example, media that favor economic and political power structures must have no illegitimate advantages in the marketplace. Outlets and journalists must invest in understanding their audiences through research in order to build up loyalty. This translates into willingness to provide financial support but also social support, for example by protesting in the case of attacks against outlets and journalists. At the political level, civil society must build and promote an agenda to strengthen the state's technical capacity to fulfill its role as duty bearer, simultaneously creating a system of checks and balances to hold states accountable.

- 3. Gender:** The violence and harassment faced by women journalists in Latin America might not be properly captured by current monitoring methodologies. Indicators must be able to grasp gender-based violence both in the field and in the newsroom. Sexual harassment, psychological abuse, online trolling and other forms of human rights abuses are rampant and the perpetrators may even be colleagues. Wage gaps due to gender are also a cause for concern in journalism. Women journalists may tend to be more frequently affected by precarious working conditions, forced to work without contracts, with a lack of social protections, pensions, paid holidays and other social benefits. The discrimination that women journalists face in their careers and communities must also be addressed. Employers must take responsibility for the safety and wellbeing of women journalists through adequate gender policies and mechanisms.

• Recommendations for Governments and Authorities

- 1. Protecting journalists, Preventing violations and Prosecuting perpetrators of crimes against journalists:** States and governments should put in place and implement measures specifically designed to improve the security of journalists so that they can exercise their rights and their work in an environment that is free from violence and intimidation. These measures should aim principally at protecting the life, integrity and property of journalists and media but should strive further to create an environment that is nurturing of journalistic work, that distributes equally and without political discriminations the public resources destined to advertisement (where available according to national laws and regulations), meeting international standards in transparency and accountability. The States' understanding of press freedoms and freedom of expression should include both negative freedom and positive freedom. States should strive towards a media ecosystem that is not only free from violence and restrictions but that nurtures and actively promotes the exercise of press freedom and freedom of speech and an independent media that serves as a counter-

weight to political and economic powers. A positive freedom approach to press freedoms and freedom of speech means creating and supporting the attitudes, institutions and structures that create and sustain open and accountable societies, prerequisites for a functional democracy and more just and inclusive societies. From the negative freedom perspective, eradicating impunity for crimes against journalists is a top priority.

- 2. National Platforms/Coalitions for the Measurement and Promotion of SDG 16:** States should form multi-stakeholder coalitions and national platforms to monitor, follow up and review progress towards all SDGs and particularly towards SDG 16. The coalitions and platforms must be open, broad and inclusive and must take into consideration government, media, and human rights organizations. The scope must also include monitoring of violations of freedoms of human rights defenders and labor Union leaders. An effort should be made to monitor SDG indicator 16.10.2 “Number of countries that adopt and implement constitutional, statutory and/or policy guarantees for public access to information”, but the effort must go beyond just recording the number of countries that have put in place guarantees for public access to information, focusing on the effectiveness of those laws. An evaluation of their mere existence is not enough; an assessment of their implementation in a methodologically consistent way that can facilitate comparisons across countries is necessary. Both indicators of SDG 16.10 are still classified (as of April 4, 2019) as Tier II indicators meaning that they are conceptually clear, have an internationally established methodology and standards are available, but data is not regularly produced by countries. If the SDG are to be reached, this data gap must be addressed.

• Recommendations for the United Nations System

- 1. SDG 16.10.1:** should be broadened to include other levels of threats and restrictions on press freedoms and freedom of expression such as financial barriers, judicial harassment and others that have been documented in detail in this report.
- 2. Strengthening of National Statistics Offices (NSO):** The UN System should also assume a primary role in providing assistance for the technical and methodological strengthening of NSOs and in promoting the formation of National SDG Platforms, as well as generally supporting and monitoring the implementation of recommendations both at a country and regional level.

VOCES DEL SUR



Con el apoyo de

